

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION

19ª REUNION — Continuación de la 2ª SESION ORDINARIA —

MARZO 29 Y 30 DE 1995

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri,
Carlos Alberto Romero, Horacio Daniel Usandizaga
y José Gabriel Dumón

Secretarios: doctor Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,
Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctor Juan Estrada y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ABASTO, Angel Leónidas
ABRIAGGLE, Carlos Enrique
ACEROLAZA, Florencio Giberto
ACHEM, Antonio
ALSAMONTE, Alberto Gustavo
ALBERTI, Juan Carlos
ALCALA, Néstor Ricardo
ALCABA, Ernesto Pedro Andrés
ALSOGARAY, Álvaro Carlos
ALVAREZ, Carlos Raúl
ALVAREZ, ECHAGÓN, Raúl Ángel
ALVAREZ GARCÍA, Normando M.
ANTELO, José María
ARAGONÉS de JUÁREZ, Mercedes
ARANDA, Saturnino Dantti
ARGÜELLO, Jorge Martín Arturo
ARIAS, César
ARMENDARIZ, Alejandro
ARRECHEA, José Salvador
AYALA, Susana Beatriz
BALESTRA, René Helvecio
BALESTRINI, Alberto Edgardo
BALESTRINI, Miguel Alberto
BALTER, Carlos Mario
BARBERA, Eliseo
BARRIONUEVO, Eduardo E.
BAUM, Daniel
BECERRA, Carlos Armando
BECERRA, Nicolás Eduardo
BENEDETTI, Jorge Enrique
BENZÍ, María Cristina
BERHONGARAY, Antonio Tomás
BREMÚDEZ, María del Pilar
BIANCHI SILVESTRE, Marcela
BONINO, Miguel Ángel
BONOMI, Silvia Mónica
BORRA, Osvaldo
BRACCHI, Osvaldo Américo
BRANDA, Carlos Ernesto
BRAVO, Alfredo Pedro
BUESER, Adalberto Edgardo
BUONELLI, Naldo Raúl A.
BRUZZO, Omar Osvaldo
BULLRICH, Patricia
BUSSI, Antonio Domingo
CABRON, Juan Carlos
CALLABA, Aníbal

CAMAÑO, Eduardo Oscar
CAMPERO, Rodolfo Martín
CARCA, Elisa Beatriz
CASTILLO, José Luis
CASTRO, Carlos José
CEBALLOS, Walter Alberto
CLOSS, Ramón Alberto
CORCHUELO BLASCO, José M.
CROSTELLI, Juan Carlos
D'ALESSANDRO, Miguel
D'AMBROSIO, Ángel Mario
DAUD, Jorge Carlos
DELLA, Roberto Antonio
DEL PABRO, Lilián
DELLEPIANE, Carlos Francisco
DÍAZ MARTÍNEZ, Jorge Raúl
DÍGON, Roberto Secundino
DI TULLIO, Héctor Horacio
DONNI, Luisa Cristina
ORISALDI, María Rita
DUMÓN, José Gabriel
DURRIEU, Marcela Margarita
ENTÉVEZ BOERO, Guillermo E.
FABRISIN, Carlos Alberto
FALLELLI, Julio César José
FAYAD, Víctor Manuel
FELGUERAS, Ricardo Ernesto
FERNÁNDEZ GILL, Guillermo
FERNÁNDEZ MELJIDE, Graciela
FLORES, Rafael Horacio
FOLLONI, Jorge Oscar
FRAGOSO, Francisco Ulises
FUCNES, Carlos Delcio
GALANTE, Pedro Jorge
GALVÁN, Raúl Alfredo
GALLO, Orlando Juan
GARAY, Nicolás Alfredo
GARCÍA MORENO, Miguel Ángel
GAUNA, Juan Octavio
GAZZA, Rodolfo Mauricio
GIMENEZ, Délfior Abel
GIMENEZ, Ramón Francisco
GIOJA, José Luis
GOLPE, Carlos Horacio
GOLPE, Néstor Lino
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GONZÁLEZ, Antonio Eriuan
GONZÁLEZ CABANAS, Tomás W.
GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan H.

GRANADOS, Dulce
GREEN, Gustavo Adolfo
GUERRERO, Luis Serafin
GUZMÁN, María Cristina
HARDY, Aníbal Osvaldo
HERRERA, Bernardo Eligio
HERRERA ARIAS, Manuel H.
HUMADA, Raúl
IBARRIA, José María
IBARRICHE, Julio César
ITURRE, César E. del Valle
JAUNARENA, José Horacio
JUNCOSA, Rodolfo Aldo
KAELLER, Ernesto Rolando
KAMMERATH, Germán Luis
KESSLER, Ana Raquel
LAFALLA, Arturo Pedro
LAHOZ, José Fernando
LAMBERTO, Oscar Santiago
LECONTE, Ricardo Guillermo
LEGUIZAMÓN, María Laura
LÓPEZ, José Augusto
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
LOSADA, Luis Enrique
LYNCH, Carlos Alberto
MACEDO, Horacio Antonio
MACHADO, Oscar Alfredo
MAIDANA, Elsa Ignacia
MANFREDOTTI, Carlos
MAQUEDA, Juan Carlos
MARCOLLI, Juan Miguel A.
MARTÍNEZ, Esteban
MARTÍNEZ, Silvia Virginia
MARTÍNEZ GARBINO, Emilio R.
MATHOV, Enrique José
MATZKIN, Jorge Rubén
MENDOZA, Claudio Ramiro
MENDOZA, Martín
MENEM, Carlos Omar
MERCADER, Martha Evelina
MERCADO LUNA, Ricardo Gastón
MICHELLI, Marco Aurelio
MICHETTE, Salomón Antonio
MIGLIOZZI, Julio Alberto
MIRALLES de ROMERO, Norma
MOLARDO, Elyio Francisco
MOLINAS, Ricardo Francisco
MOREAU, Leopoldo Raúl
MORELLO, Emilio Pedro

MULLER, Mabel Hilda
 MUNIAGURRIA, Marcelo Julio
 MURGO, Marcelo Bernardo
 NACUL, Miguel Camel
 NATALE, Alberto Adolfo
 NEDER, Jorge Humberto
 NEGRI, Mario Raúl
 NIEVA, Alejandro Mario
 NISO, Jorge
 NOYAU, Pedro José
 OLIVERA, Enrique José
 ORGAZ, Carlos Alfredo
 ORQUIN, Leopoldo Manuel
 ORTIZ MALDONADO, Gastón H.
 PARADA, Alberto
 PARAGON, José María
 PAROLA, José María
 PASCUAL, Rafael Manuel
 PATTERSON, Ricardo Ansel
 PELÁEZ, Víctor
 PELLIN, Osvaldo Francisco
 PERALTA, Aníbal Pedro
 PEREZ, Jorge Teodoro
 PERLINI, Gioconda Eulalia
 PESCE, Félix
 PICCINI, Ana Ida
 PICHIETTO, Miguel Ángel
 PIERRE, Alberto Reinaldo
 PINTO, Guillermo
 POLINO, Héctor Teodoro
 POLO, Luis Nicolás
 PRAT, Alfredo Ernesto
 RE, Ricardo Horacio
 RICO, Aldo
 RODRÍGUEZ, Jesús
 RODRÍGUEZ, José
 RODRÍGUEZ, Mabel E.
 RODRÍGUEZ SASUDO, Hugo B.
 ROGGERO, Humberto Jesús
 ROIG, Ángel
 ROJO, Rubén Darío
 ROMERO, Carlos Alberto

ROMERO, Humberto Antonio
 ROY, Irma
 RUÍZ PALACIOS, José David
 SALINO, María Antonia
 SAMPIETRO, Darci
 SANTIN, Eduardo
 SEBASTIANI, Claudio A.
 SMITH, Santos
 SOBRINO, Margarita María
 SOLANAS, Fernando E.
 SORIA, Carlos Ernesto
 SPINOSA, Augusto Juan
 STORANI, Federico
 SUCARIA, Nefel
 SUEIRO, Carlos Adolfo
 TENEV, Carlos
 TEOFILO, Jorge Nicolás
 TERRAGNO, Rodolfo Héctor
 TOGNI de VELEY, Adriana
 TOLOMEO, Leonor Ester
 TOMA, Miguel Ángel
 TOPA, Raúl Roque
 TOTO, Francisco Patricio
 TRETTEL MEYER, Raúl
 TROYANO, Silvia Elena
 USANDIZAGA, Horacio Daniel
 VARELA CHD, Eduardo
 VÁZQUEZ, Roberto
 VÁZQUEZ, Silvia Beatriz
 VENESIA, Gualberto Edgardo
 VICCHI, Raúl Horacio
 VIGLIONE, Atilio Oscar
 VITAL, José Alberto
 ZAVALA, José Luis
 ZUCCARDI, María Cristina

AUSENTES, CON LICENCIA:

CERDERA, Rogelio Rafael
 SCHIARETTI, Juan

AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACION DE LA HONORABLE CAMARA:

AYETZ, Lilliana
 BARBOTI, Atilio Ector
 CAMARA, Mario Ángel
 CASARI de ALARCIA, Leonor
 CASTILLO, Oscar Aníbal
 DURASONA y VEDIA, Francisco de
 KELLY, Elsa Diana Rosa
 PEPE, Lorenzo Antonio
 PERNASSETTI, Horacio F.
 VALCARCEL, Juan Manuel
 ZICARELLI, Orlando A.

AUSENTES, CON AVISO

ADAIME, Felipe Teófilo
 ALENDE, Oscar Eduardo
 ALVAREZ, Carlos Alberto
 BISCHOF, Enrique Alberto
 FIGUEROA, Pedro Octavio
 HERNÁNDEZ, Antonio María
 KOTH, Carlos
 LARRABURU, Dámaso
 LOPEZ, Alcides Humberto
 LLOPIS, Enrique Raúl
 MARCOS, Ricardo Ernesto
 MARTÍNEZ, Manuel Luis
 MENEGHINI, Javier Reynaldo
 MONTIEL, Sergio Alberto
 MURIEL, Néstor Jorge
 RODRIGO, Esteban Joaquín
 RUBINI, Mirta Elsa
 SAADI, Ramón Eduardo
 SANCHEZ GALDEANO, Roque
 SARQUIZ, José Alberto
 SCELZI, Carlos José
 VARELA, Néstor Ángel

-- La referencia acerca del distrito, bloque y período del mandato de cada señor diputado puede consultarse en el Diario de Sesiones correspondiente a la 12ª sesión ordinaria (12ª reunión) de fecha 8 y 9 de marzo de 1995.

SUMARIO

1. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Roggero con motivo de declaraciones vertidas por el embajador de los Estados Unidos de América en nuestro país, señor James Cheek, a causa del tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de ley sobre régimen de patentes de invención y de modelos de utilidad. (Pág. 821.)

I. Planteamiento y pronunciamiento de la Honorable Cámara mediante el que acuerda a la cuestión carácter preferente. (Pág. 821.)

II. Consideración y proposición de que la Honorable Cámara apruebe una declaración sobre la cuestión. (Pág. 821.)

2. Moción de orden formulada por el señor diputado Matzkin de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de proponer el tratamiento del asunto al que se refiere el número 15 de este sumario. Se aprueba. (Página 826.)

3. Moción del señor diputado Matzkin de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 15 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 826.)

4. Continúa la consideración de los proyectos de ley de los señores diputados Viechi y otros (540-D.-94), Abihaggle y otros (859-D.-94) y Becerra (N.º 63-D.-95), sobre régimen para la denominación de origen de los vinos. Se sanciona un proyecto de ley que unifica dichas iniciativas. (Pág. 826.)

5. Consideración de los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en el proyecto de ley en revisión por el cual se otorgan facultades al Banco Central de la República Argentina para una mayor flexibilización de la técnica de descuentos y redescuentos (3-S.-95). Se sanciona con modificaciones el dictamen de mayoría. (Pág. 827.)

6. Moción de orden formulada por la señora diputada Bullich de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de considerar el asunto al que se refiere el número 8 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 827.)

7. Moción de la señora diputada Bullich de que se trate sobre tablas el asunto al que se refiere el número 8 de este sumario. Se aprueba. (Pág. 827.)

8. Consideración del proyecto de declaración de los señores diputados Matzkin y Bullich por el cual

en una sola votación el texto consensuado sometido a consideración de la Honorable Cámara.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el proyecto de ley.¹

Se comunicará al Honorable Senado.

Se va a votar una inserción solicitada por el señor diputado Vicchi.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda autorizada la inserción solicitada.²

5

OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

(Orden del Día N° 1.251)

Dietamen de mayoría

Honorable Cámara:

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas han considerado el proyecto de ley en revisión por el que se acuerdan facultades al Banco Central de la República Argentina para una mayor flexibilización de la técnica de descuentos y adelantos; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º — El Congreso de la Nación, en ejercicio de las potestades monetarias que le confiere el artículo 75 incisos 6º y 11 de la Constitución Nacional y artículo 3º párrafos 3º y 4º de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina aprobada por ley 24.144, autoriza a éste a lo siguiente:

- a) A otorgar los descuentos y adelantos previstos en el artículo 17, incisos f) y e) de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina aprobada por ley 24.144, sin observar los plazos y máximos por entidad contemplados por dichas normas, cuando ello fuere necesario para dotar de adecuada liquidez al sistema financiero o cuando las circunstancias lo hicieren aconsejable, sin que en ningún caso puedan comprometerse las reservas de libre disponibilidad que respaldan la base monetaria;

- b) A ceder, transferir o vender a las entidades financieras que tuvieran excedentes de liquidez los créditos que hubiere adquirido de las entidades financieras afectadas por problemas de liquidez;
- c) A disponer que la integración de los requisitos de reserva previstos en el artículo 28, párrafo 3º de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina aprobada por ley 24.144, se integren exclusivamente en dinero en efectivo o en depósitos a la vista en el Banco Central de la República Argentina, en la moneda que éste indique;
- d) A llevar hasta ciento veinte (120) días el plazo previsto en el primer párrafo del artículo 49 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina aprobada por ley 24.144.

Art. 2º — La autorización concedida se extenderá desde el 27 de febrero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995.

Dentro de dicho plazo, el Poder Ejecutivo deberá proponer al Congreso de la Nación un sistema de seguro de garantía limitada, onerosa y privada que cubra los riesgos de los depósitos bancarios; complementario al Sistema de Protección de Depósitos establecido en el artículo 49 y 53 inciso e) de la ley 21.526 modificada por ley 24.144.

Art. 3º — Deróganse los artículos 26, 27, 28 y 29 del decreto 290/93 dictado el 27 de febrero de 1993.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 15 de marzo de 1995.

Oscar S. Lamberto. — Miguel A. Balestrini.
— Carlos J. Seelzt. — Carlos F. Dellepiane. — Carlos H. Golpe. — Carlos E. Abihaggle. — José S. Arrechea. — Daniel Baum. — Eduardo O. Camaño. — Juan C. Crostelli. — Miguel H. D'Alessandro. — Jorge O. Folloni. — José L. Gioja. — Antonio E. González. — Gustavo Green. — Marcelo E. López Arias. — Marcos A. Michelli. — Salomón A. Michilto. — Marcelo J. Muniagurria. — Humberto J. Roggero. — Carlos E. Soría. — Carlos A. Sueiro. — Carlos Tenec. — Eduardo Varela Cid.

En disidencia parcial:

María C. Guzmán. — Carlos E. Gómez Centurión. — Ana R. Kessler. — Ricardo F. Molinas.

En disidencia total:

José M. Barbia.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas han analizado el proyecto de ley enviado por el Ho-

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 904.)

² Véase el texto de la inserción en el Apéndice. (Página 926.)

honorable Senado de la Nación por el que en ejercicio de sus potestades monetarias autoriza al Banco Central de la República Argentina a modificar algunas atribuciones otorgadas por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina aprobada por ley 24.144.

En la medida que esta autorización permitirá acelerar la regularización de situaciones de liquidez por las que atraviesa el sistema financiero producto de aspectos externos a nuestra política monetaria, se consideró oportuno realizar algunas modificaciones al proyecto venido en revisión por el Honorable Senado de la Nación, las que serán expuestas por el miembro informante.

En base a lo expuesto se aconseja la sanción del presente.

Oscar S. Lamberto.

II

Dictamen de minoría

Honorable Cámara:

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, han considerado el proyecto de ley en revisión por el que se propician modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º—Incorpórase a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, como artículo 17 bis, el siguiente:

Cuando existiera una situación de emergencia extraordinaria que pueda afectar la estabilidad del sistema financiero, se podrán exceder los plazos y montos por entidad establecidos en los incisos b) y c) del artículo 17. Para tomar esta decisión, el directorio del Banco Central de la República Argentina deberá contar con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. Superada la emergencia, el Banco Central de la República Argentina deberá rendir inmediatamente cuenta de lo actuado a las comisiones especializadas del Congreso de la Nación a que alude el artículo 10, inciso i) de esta Carta Orgánica. En estos casos deberán cumplimentarse todos los requisitos establecidos en el artículo 17 y, en modo particular, las garantías satisfactorias.

El monto total de redescuentos y adelantos a las entidades financieras por el Banco Central de la República Argentina en virtud de este artículo y el precedente, deberá respetar las disposiciones de la Ley de Convertibilidad y, en su caso, de la Ley de Presupuesto. En ningún caso podrán comprometerse las reservas de libre disponibilidad que respaldan la base monetaria.

Art. 2º—Incorpórase al artículo 18 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina el siguiente inciso g):

Ceder o vender a las entidades financieras los créditos que hubiera recibido como consecuencia de las operaciones descritas en los artículos 17 y 17 bis.

Art. 3º—Incorpórase al primer párrafo del artículo 49 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, el siguiente texto:

A pedido del superintendente, el directorio del Banco Central de la República Argentina podrá ampliar dicho plazo, por una sola vez, por sesenta (60) días más, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.

Art. 4º—El Poder Ejecutivo deberá proponer dentro de los sesenta (60) días, al Congreso de la Nación, un régimen de seguro de depósitos parcial, obligatorio y oneroso, a cargo de las entidades del sistema.

Art. 5º—Deróganse los artículos 26, 27, 28 y 29 del decreto 290/95, dictado el 27 de febrero de 1995.

Art. 6º—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Enrique J. Olivera. — José M. Pardo. —
Horacio E. Pernausti. — Silca B. Viquez.*

INFORME

Honorable Cámara:

Venimos por la presente a presentar un dictamen alternativo al proyecto aprobado por el Honorable Senado de la Nación, que modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

La actual situación de crisis financiera que ha motivado dicho proyecto y el presente dictamen no hace sino confirmar nuestra opinión puesta de manifiesto en el informe que acompañó nuestro dictamen de minoría en oportunidad de considerarse las modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en el año 1992 (Orden del Día N° 339, páginas 1507-1520).

Decíamos, entonces, que era prudente mantener la posibilidad de que el Banco Central pudiera actuar como prestamista de última instancia para atender situaciones donde estuviera en juego la estabilidad del sistema financiero. Expresamos textualmente hace más de dos años: "un desbalance serio en el sistema financiero, más tarde o más temprano, exigirá una acción gubernamental, ya que los costos de la falta de intervención pueden ser mayores. En consecuencia, es preferible que esta intervención esté adecuadamente regulada evitando que el proceso carezca de un marco legal apropiado, con toda la carga de discrecionalidad que ello puede implicar. Creemos que el intento de limitar los eventuales préstamos a plazos perentorios es vacuo, ya que en presencia de dificultades serias, el plazo de devolución del préstamo lo impondrá la propia realidad".

Por ello, proponemos una modificación de carácter permanente a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, incorporando un artículo 17 bis, para casos de emergencia, que permita ampliar los plazos, y exceder el monto de la asistencia crediticia por entidad fijados en el artículo 17. En una situación de crisis con retiro de depósitos, estos límites pueden ser insuficientes para resolver situaciones de iliquidez transitoria.

Las garantías que el Banco Central de la República Argentina tome en esos casos, deben ser siempre suficientes para asegurar el recupero de las sumas prestadas.

En cuanto a la facultad del Banco Central de la República Argentina para ceder o vender a entidades financieras las carteras de crédito que hubiera adquirido como consecuencia de operaciones del artículo 17 y 17 bis, no vemos inconvenientes en aceptar la propuesta del Honorable Senado.

No compartimos, en cambio, el criterio previsto para la integración de los encajes, que se aparta del actual artículo 28, cuya concepción respecto a la tradición y prácticas bancarias.

De otro lado, dado que la experiencia ha demostrado la insuficiencia del plazo establecido en el artículo 49 de la Carta Orgánica, se propone ampliar su plazo por sesenta (60) días más, por una única vez, y por decisión del directorio del Banco Central de la República Argentina adoptada por mayoría calificada.

Respecto de la garantía de los depósitos, reiteramos la posición sustentada en nuestro dictamen en minoría con motivo de la sanción de la ley 24.144. Propiciamos un sistema de seguro de garantía parcial, obligatoria y onerosa, solventada integralmente por las entidades que componen el sistema, para proteger a los depósitos de las personas físicas y sucesiones indivisas.

Dijimos en 1992 "un último tema se refiere al régimen de garantía a los depósitos en el sistema financiero. Como es conocido, su función esencial es prevenir las corridas bancarias y suministrar al gobierno las herramientas para encarar estas situaciones, fortalecer la confianza del sistema bancario, y proteger a los depositantes.

"La mayor parte de los países cuentan con algún régimen de protección a los depósitos sea privado o público, voluntario u obligatorio, total o limitado a un monto del capital invertido.

"(...) Finalmente, entendemos que es necesario proteger al pequeño ahorrista, que normalmente no está en condiciones de acceder y de interpretar la información sobre la calidad de la cartera de préstamos de una entidad financiera, aunque disponga de ella. Por ello, propiciamos una garantía limitada a un monto que tiene relación con la media de las indemnizaciones laborales, de máxima actualidad por el proceso de reconversión de la economía".

Por todas estas razones es que venimos a presentar este proyecto de minoría.

Enrique J. Olivera. — Horacio F. Pennacetti.

ANTECEDENTE

Buenos Aires, 9 de marzo de 1995.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º.—El Congreso de la Nación, en ejercicio de las potestades monetarias que le confiere el artículo 75, incisos 6 y 11 de la Constitución Nacional y el artículo 3º, párrafos 3º y 4º de la ley 24.144, orgánica del Banco Central de la República Argentina autoriza a éste a lo siguiente:

- A otorgar los descuentos y adelantos previstos en el artículo 17, incisos b) y c) de la ley 24.144, sin observar los plazos y recaudos contemplados por dichas normas, cuando ello fuere necesario para dotar de adecuada liquidez al sistema financiero o cuando las circunstancias lo hicieren aconsejable, sin que en ningún caso puedan comprometerse las reservas de libre disponibilidad que respaldan la base monetaria;
- A ceder, transferir o vender a las entidades financieras que tuvieran excedentes de liquidez, los créditos que hubieren adquirido de las entidades financieras afectadas de problemas de liquidez;
- A disponer que la integración de los requisitos de reserva previstos en el artículo 18, párrafo 3º de la ley 24.144, se integren exclusivamente en dinero en efectivo o en depósitos a la vista en el Banco Central de la República Argentina, en la moneda que éste indique;
- A llevar hasta ciento veinte (120) días el plazo previsto en el primer párrafo del artículo 49 de la ley 24.144.

Act. 2º.—La autorización concedida se extenderá desde el 27 de febrero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 1995.

Dentro de dicho plazo, el Poder Ejecutivo deberá proponer al Congreso de la Nación la organización de un sistema de seguro de garantía limitada, onerosa y privada que cubra los riesgos de los depósitos bancarios.

Art. 3º.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Edgardo R. Piazzoli.
EDUARDO MENEAL

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M.A.).— Señor presidente: el dictamen en consideración recoge la sanción de la Honorable Cámara de Senadores en el proyecto de ley sobre modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central, establecida por la ley 24.144.

Los temas incluidos en el aludido dictamen han sido analizados en las comisiones respectivas, y ello dio lugar al Orden del Día N° 1.251 que los señores diputados tienen en su poder. No obstante, hemos considerado necesario incorporar al citado despacho algunas modificaciones, a las que nos referiremos durante el tratamiento en particular de la norma.

Sin embargo, de alguna manera esto me obliga a efectuar breves consideraciones sobre el asunto en análisis.

Debemos tener en cuenta que estamos tratando la ampliación de facultades para que el Banco Central de la República Argentina actúe como lo que se ha dado en llamar prestamista de última instancia.

Recuerdo a la Honorable Cámara que esta cuestión fue motivo de profunda discusión durante el tratamiento de la ley 24.144, que tuvo origen en el Senado y que esta Cámara aprobó luego de efectuarle modificaciones muy importantes.

Como conclusión de ese debate se sancionó una ley que contemplaba una restricción muy profunda de las facultades del Banco Central para actuar como prestamista de última instancia, y a la vez fue derogado el dispositivo de la garantía ilimitada del Estado en cuanto a los depósitos.

Aprobamos ese régimen convencidos de que los antecedentes del sistema financiero argentino recomendaban una política restrictiva en la materia. En una palabra, cuando se votó la ley 24.144 se aprobó una política muy restrictiva para el Banco Central de la República Argentina, a efectos de preservar el patrimonio de los argentinos y de que no volvieran a ocurrir los hechos que habían atormentado al país, ocasionándole pérdidas de casi 100 mil millones de pesos o dólares.

Estoy absolutamente convencido de que estas políticas legislativas restrictivas seguidas por el Banco Central y por el Ministerio de Economía han significado un seguro muy importante, que le ha permitido al país sortear o afrontar las difíciles situaciones que se generaron a raíz de la crisis desatada en México y que repercutió negativamente entre nosotros. El Banco Central y en general la economía de nuestro país pudieron sortear esas dificultades, justamente por esas limitaciones y por esa política restrictiva.

Quiero citar algunos indicadores, para que tengamos en cuenta cuáles han sido los efectos de esta política sobre la situación financiera real. En nuestro país, por cada peso que se deposita en el sistema financiero se generan 2,20 pesos de depósitos que luego producen créditos. Esto como consecuencia de lo que se denomina el multiplicador bancario, que es mayor si la política financiera es laxa y permisiva y menor si dicha política es restrictiva y cuidadosa en la materia.

Para hacer algunas comparaciones, podemos señalar que en México este multiplicador es de 7, es decir que por cada peso que se deposita en el sistema financiero mexicano, se generan —reitero a través de este elemento denominado multiplicador bancario— 7 pesos de depósitos y aproximadamente 6 pesos de crédito. Así como un peso que se pone en el sistema genera esta expansión, también un peso que se retira origina una retracción equivalente y proporcional.

La economía mexicana ha sufrido, en consecuencia, efectos devastadores en el crédito porque justamente ese país tuvo una política monetaria laxa y flexible. En cambio, la Argentina pudo controlar estos efectos porque el multiplicador al que hice referencia era mucho menor. Pero obsérvese que el hecho de haber restringido las facultades del Banco Central para prestar a los demás bancos permitió que cuando llegó la crisis a nuestro sistema financiero dicho banco contara con reservas suficientes del orden de los 1.000 millones de pesos.

Si la política hubiese sido diferente —es decir, más laxa— y si hubiésemos mantenido el criterio que derogamos con la ley 24.144, esta crisis seguramente nos habría encontrado con un Banco Central sin reservas excedentes e incapaz de hacer frente a la situación. ¿Cuál es el factor que determina que el multiplicador sea dos o siete? Reside en los encajes.

Mantuvimos una política de altos encajes, compatible con la alta volatilidad de los depósitos en el sistema financiero argentino. Se trató de una política responsable. Si todos los depósitos del sistema financiero argentino hubiesen sido institucionales, como ocurre en gran medida en Chile, podríamos haber reducido los encajes, ya que la generación de créditos y depósitos que habría resultado del nuevo multiplicador bancario no habría significado un mayor riesgo para la economía argentina.

Ahora nos encontramos ante la necesidad de afrontar una situación de crisis, que era muy difícil de prever en aquellos años en que discutíamos la ley 24.144. Por ello es necesario faci-

litar al Banco Central un conjunto de medidas a efectos de que pueda operar con mayores facultades y mejores posibilidades de éxito en situaciones dificultosas.

Otro instituto que estamos cambiando es el vinculado con la suspensión transitoria de las instituciones financieras ante situaciones de iliquidez. Con la ley 24.144 el Congreso de la Nación produjo un hecho de singular importancia: la judicialización de la liquidación de las entidades financieras. Ello ocurrió ante el cúmulo infernal de liquidaciones de bancos, que tanto costaron al país y que estaban organizadas sobre la base del poder de administración del Banco Central y con muy poca participación de la Justicia.

Con esta norma flexibilizaremos esta política. Ampliaremos el plazo de suspensión actual, que es muy restrictivo y alcanza los 30 días. En el debate en particular se podrá observar cómo hemos generado un conjunto de instrumentos destinados a salvar a las entidades financieras viables, garantizando el dinero a los depositantes y el mantenimiento del crédito otorgado por esas instituciones. Todo ello lo haremos sin comprometer el patrimonio del Estado.

Además, incorporamos normas con relación a un tema que genera una alta sensibilidad en la población. Me refiero a la garantía que tendrán los argentinos en el caso de que sus depósitos van a ser reintegrados en tiempo y forma. Se trata de una garantía inevitable y necesaria. En aquel debate hicimos alusión a que íbamos a pasar a un sistema distinto al que estaba en vigencia, representado por la garantía estatal irrestricta y total de los depósitos bancarios. Esa experiencia ya la habíamos vivido. En 1992, cuando sancionamos la ley 24.144, introdujimos un sistema novedoso. Lo ideamos con participación de todos los bloques políticos que intervinieron en un rico debate en esta materia, y así creamos lo que se denominó el sistema de protección de depósitos, que hoy rige en nuestro país.

Actualmente, quien deposita hasta tres mil pesos en el sistema financiero argentino tiene protección total; también la tiene quien deposita por más de 180 días. Todo esto se da a partir del funcionamiento de un conjunto de normas que incorporamos a la Ley de Entidades Financieras. En esta oportunidad y sobre la base de una autocrítica que nos hacemos, advertimos que estas medidas no han sido suficientes y por eso planteamos una modificación al sistema de depósitos.

Se propicia incrementar de tres mil a cinco mil pesos el monto de los depósitos mínimos

protegidos; asimismo, disminuir de 180 a 90 días el plazo necesario a efectos de que los depósitos estén garantizados. Además, planteamos la necesidad de que el sistema financiero cuente con un seguro para los depósitos, que tendrá la característica de ser limitado, oneroso y obligatorio.

Estas son las directrices básicas que define el Congreso de la Nación para que el Banco Central de la República Argentina instrumente un sistema de seguro adicional a la actual protección de depósitos con que cuenta nuestro país. Todo este conjunto de normas se complementa con modificaciones que proponemos a la Ley de Entidades Financieras, con la finalidad de que los órganos que conducen estos aspectos de la economía argentina tengan los instrumentos necesarios a efectos de producir cambios en los reales conductas que afectan el sistema financiero en nuestro país.

En términos generales, estos son los temas sobre los cuales tiene que debatir esta Cámara. Durante la discusión en particular hablaremos en detalle sobre cada una de estas propuestas. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Pieri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: estamos tratando el Orden del Día Nº 1.251, que contiene un dictamen de mayoría y otro de minoría.

Como bien dijo el señor diputado Balestrini, el oficialismo pretende introducir modificaciones ulteriores a la Carta Orgánica del Banco Central y a la Ley de Entidades Financieras. El bloque de la Unión Cívica Radical ha presentado un dictamen de minoría; en consecuencia, anticipo nuestro voto negativo a la consideración en general del de la mayoría.

Frente a la crisis que estamos viviendo no puedo sustraerme a la necesidad de hacer algunas reflexiones —sin extenderme demasiado— acerca de por qué estamos en esta situación. Lamentablemente, el Poder Ejecutivo ha incurrido en una serie de desaciertos y de errores que han contribuido a crear una situación propicia para que la crisis mexicana tuviera una repercusión con efectos graves, serios y perturbadores para nuestro país.

Manifiesto esto porque el gobierno de la Nación no hizo caso a las advertencias que repetidamente formulamos desde este bloque. Dijimos hace casi tres años que un esquema económico dependiente de la continuidad del flujo de capitales externos presentaba una enorme vulnerabilidad. También manifestamos que la

permanencia de los capitales externos dependía de factores completamente ajenos a nuestras posibilidades de control.

Ya en el tercer trimestre del año pasado advertíamos que había riesgos al presentar un proyecto de ley de presupuesto para 1995 que era inviable tanto por el lado de los recursos como por el de los gastos. Señalamos que el gasto había crecido en 5.200 millones de pesos respecto del correspondiente al presupuesto ejecutado en 1993. También indicamos que el cálculo de recursos no se compadecía con la realidad ni con las posibilidades concretas de la población de afrontar una cada vez mayor presión tributaria. Manifestamos —entre otras advertencias— que el mercado financiero internacional iba a malinterpretar la decisión tomada por el Poder Ejecutivo de suspender la auditoría reforzada del Fondo Monetario Internacional. Lamentablemente, nada de esto fue tenido en cuenta.

Hacia fines de diciembre del año pasado se produce el episodio mexicano. El gobierno equivoca su diagnóstico al manifestar que lo que estaba ocurriendo era una tormenta de verano, ya que desde entonces ha estado corriendo detrás de esa crisis. Subrayo que, como consecuencia de ese mal diagnóstico, las decisiones tomadas en el sector financiero fueron equivocadas. Esto no lo digo solamente por la situación que vivimos —que me relevaría de cualquier comentario adicional—, sino porque en 1992 desde estas bancas planteamos al Honorable Congreso de la Nación que sería una imprudencia eliminar el carácter de prestamista de última instancia del Banco Central. Entendíamos que siempre podían existir emergencias, aunque no las avizorábamos en aquella época rosada. Emergencias puede haber siempre, pero son previstas por todos los países del mundo.

Es posible que la crisis mexicana no haya podido ser prevista, pero también es cierto que la emergencia —en el sentido lato del término— debió haber sido prevista en la Carta Orgánica del Banco Central y en la Ley de Entidades Financieras.

También dijimos en 1992 que era indispensable un sistema de seguro de depósitos que no tuviera nada que ver con el sistema estatal e irrestricto que regía hasta ese entonces. Fuimos insistentes en esta cuestión. Dijimos que la supresión de la característica de prestamista de última instancia del Banco Central y la ausencia de un sistema de seguro de depósitos eficaz era alarmante, porque no compartíamos el privilegio de 3.000 pesos acordado a cada depositante sobre los encajes del sistema bancario.

Dijimos que la combinación de ambas fallencias podía colocar al Estado en una situación inermes frente a la corriente de una crisis.

Me permitiré dar lectura de lo que dijimos, en pocos renglones, en 1992. Por cierto, hubiéramos querido habernos equivocado. En ese entonces expresamos: "Un desbalance serio en el sistema financiero, más tarde o más temprano, exigirá una acción gubernamental, ya que los costos de la falta de intervención pueden ser mayores. En consecuencia, es preferible que esta intervención esté adecuadamente regulada, evitando que el proceso carezca de un marco legal apropiado, con toda la carga de discrecionalidad que ello puede implicar. Creemos que el intento de limitar los eventuales préstamos a plazos perentorios es vacío, ya que, en presencia de dificultades serias, el plazo de devolución del préstamo lo impondrá la propia realidad".

Esto lo dijimos en 1992 y fuimos igualmente elocuentes respecto del sistema de garantía de los depósitos. Propusimos un sistema limitado —en aquel momento lo llamamos parcial—, obligatorio y oneroso que actuara como un verdadero seguro que permitiera disuadir las posibles corridas bancarias y que tuviera un efecto preventivo. Esto es lo que lamentablemente no pudimos disponer en esta crisis financiera que estamos viviendo. Lamentamos que se haya incurrido en estas omisiones a pesar de nuestras advertencias y de nuestros proyectos concretos y detallados sobre el particular.

Desde la instalación de esta crisis financiera en la República Argentina dijimos que el Poder Ejecutivo corrió detrás de la crisis. Hoy le preguntamos al presidente del Banco Central por qué esta equivocación en el diagnóstico, por qué esta minimización de lo que estaba ocurriendo desde el comienzo. Le preguntamos también con qué base legal se tomó la decisión de dolarizar los encajes, de dar el primer paso en la dolarización de la economía, como se llamó en aquel entonces.

Nosotros advertíamos que se estaba violando el artículo 28 de la Carta Orgánica del Banco Central. Le preguntamos sobre qué bases jurídicas, con qué criterios de objetividad y con qué límites a la discrecionalidad se había constituido el Comité de Bancos Privados, a los que se les reducían los encajes para que tuvieran fondos para actuar como red de salvataje. También le preguntamos cuáles eran los criterios y el respaldo normativo con los cuales el Banco Central de la República Argentina dispuso un depósito indispensable a entregar al Banco de la Nación Argentina para que éste

—aunque sus estatutos no le permitían actuar en este carácter— hiciera las veces de Banco Central y tendiera una red de salvataje al sistema financiero. Le preguntamos cuáles eran los criterios con que el Banco Central de la República Argentina estaba operando frente a la crisis desde la sanción del decreto 290/95. También le preguntamos cuál era el criterio de selectividad de las entidades y cuáles los procedimientos reglados para evitar la discrecionalidad y dar transparencia a la operatoria.

La mentalmente no obtuvimos respuestas satisfactorias, porque había un recado original: el de improvisación. Desde 1992, la omisión de las facultades de asistencia financiera por condiciones de iliquidez del Banco Central y la ausencia de un sistema de seguro de depósitos crearon el ámbito para que estas improvisaciones se operaran por parte del Banco Central en el sistema financiero argentino.

Decíamos que este asunto se puede dividir en tres partes fundamentales: la devolución al Banco Central de las aptitudes para asistir en situaciones de iliquidez en periodos de emergencia; la instauración de un sistema de seguro de depósitos y estas modificaciones a la Carta Orgánica del Banco Central y a la Ley de Entidades Financieras que el justicialismo aspira a incorporar.

Nosotros hemos presentado otra alternativa: un dictamen de minoría en el que reproducimos lo que sosteníamos en 1992. En este sentido, añadimos, por supuesto, nuestra postura en cuanto a que la autonomía del Banco Central debe tener por lo menos el límite del control parlamentario. También señalamos la necesidad de que, ante situaciones con alto riesgo de discrecionalidad, el Banco Central tome resoluciones en esta materia por medio de una mayoría calificada, esto es, la mayoría absoluta de los miembros de su directorio. Este aspecto no ha sido recogido por el dictamen de mayoría.

El proyecto sancionado por el Senado incurrió, a nuestro criterio, en exageraciones e incluso en un grueso error cuando habla de asistencia por iliquidez, que es la supresión de garantías. Cuando se está asistiendo por iliquidez debe haber garantías, y eso es lo que hemos establecido en nuestro proyecto alternativo, porque de otra manera no estaríamos hablando de asistencia por iliquidez sino de asistencia por insolvencia, y eso es harina de otro costal.

Por cierto que las propuestas que hicimos en 1992 y que reproducimos ahora no son una invención del bloque de la Unión Cívica Ra-

dical; tienen el respaldo de la experiencia registrada en la mayoría de los países del mundo en cuanto a las características de prestamista de última instancia del Banco Central, diferenciándonos de lo que ocurrió en el pasado con los límites de la convertibilidad y la ley de presupuesto. Teniendo en cuenta la experiencia de otros países con economías modernas, respaldamos nuestra postura acerca del sistema de seguro de depósitos en esos otros modelos donde las opciones pueden ser múltiples: de tipo obligatorio o voluntario, administrados por el Estado o por el sector privado, onerosos, con el criterio de un seguro —es decir, establecimiento de una prima— o pagaderos a través de "Rentas generales"; pero siempre con la existencia de un respaldo parcial de los depósitos. Esto es así porque los sistemas financieros son endeblés frente a las crisis de confianza, y éstas exigen la adopción de medidas como las que han sido experimentadas en otros países del mundo.

Como señalé anteriormente, nuestro dictamen de minoría incorpora criterios de control parlamentario que también deberían extenderse a las propuestas adicionales que está presentando el bloque oficialista respecto de las facultades del Banco Central para actuar en los procesos de reestructuración de las entidades. Asimismo, sostenemos que debe haber mayorías calificadas para tomar estas decisiones, pues mediante aquéllas existirá seguridad en el sentido de que las cuestiones complejas y delicadas sean estudiadas; al mismo tiempo, los funcionarios que toman las decisiones deben asumir con conciencia sus responsabilidades.

Establecemos en nuestro dictamen de minoría que es inconveniente que los encajes se hagan en moneda distinta de aquella en la cual están constituidos los depósitos; desde el punto de vista técnico, esto no resiste el menor análisis. Advertimos que en el proyecto enviado recientemente esta exigencia ha desaparecido. Celebro que haya sido así, porque de lo contrario podría prestarse a abusos o a que el Banco Central hiciera exactamente lo opuesto de lo que se pretende: autorizar depósitos en pesos cuando existieran depósitos en dólares. Por cierto, esto no contribuiría a la solidez del sistema financiero ni mucho menos a la continuidad de la estabilidad económica.

Con absoluta franqueza, porque somos conscientes de la gravedad de la crisis, y así como actuamos con serenidad también lo hacemos con responsabilidad, dijimos que teníamos temor al péndulo. Hasta hace pocos días el justicialismo

mantenía una posición extrema en cuanto a las mínimas facultades del Banco Central con respecto a la ausencia de un sistema de seguro de depósitos. Tenemos temor a los riesgos del entusiasmo.

Quizá apelando a la tradición republicana, a las exageraciones del converso, tenemos miedo de que se pase al otro extremo, es decir, a un punto en el que no sólo se exagere con las atribuciones del Banco Central sino que incluso se caiga en delegaciones impropias que podrían derivar de este fondo fiduciario acerca del cual hemos tomado conocimiento anoche. Tenemos temor a la desmesura con que pueda actuarse frente a la emergencia y a la crisis.

Por de pronto, vamos a proponer que a los fondos fiduciarios —cualesquiera que sean— no se les encomienden facultades que son propias e indelegables del Banco Central.

Por otra parte, nos preocupan las propuestas del bloque Justicialista —en rigor, del Poder Ejecutivo— que puedan modificar de soslayo, oblicuamente, la Ley de Entidades Cooperativas. Es larga la tradición del radicalismo en defensa del cooperativismo; por lo tanto, no podemos aceptar que de rondón se incorpore un artículo que atenta contra el espíritu cooperativo que hemos defendido desde siempre.

Como lo sostuviéramos en 1992, entendemos que el Banco Central debe tener mayores facultades para atender situaciones de iliquidez. También creemos que debe existir control parlamentario cuando el Banco Central actúa en la reestructuración del sistema financiero. Asimismo debería haber un sistema de seguro de depósitos parcial, oneroso y obligatorio, como decíamos en 1992, pero advertimos acerca del riesgo de caer en excesos, es decir, de que el péndulo se vaya hacia el otro lado, como refferíamos anteriormente.

Es necesario actuar con decisión frente a la crisis, pero hay que hacerlo —como aquel filósofo nacido en Estagira— en su medida y armoniosamente. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alsogaray. — Señor presidente: estamos tratando bajo presión y con urgencia modificaciones trascendentales a dos leyes muy importantes: la Carta Orgánica del Banco Central y la de entidades financieras.

Estas leyes deben regir por muy largo plazo, para que en el transcurso del tiempo y en la práctica de los negocios se vaya consolidando y definiendo así el escenario en el cual la actividad privada puede organizar la marcha de su trabajo.

El hecho de que a pocos meses de haberse sancionado estas normas las estemos modificando significa que estamos frente a un problema especial, que nos obliga a reflexionar.

Se nos presenta un interrogante difícil de resolver. Una hipótesis es que el Poder Ejecutivo esté reclamando medidas de emergencia para evitar una grave crisis financiera. El otro supuesto es que esta norma forme parte de una tarea de legislación permanente que tiene por objeto ir dotando al país de mejores instrumentos en el mediano y largo plazo.

¿Cuál sería la actitud a adoptar frente a estas dos suposiciones? Si se trata de una emergencia y se comprueba que lo que se propone es apto y útil para resolverla, obviamente la Cámara debería apoyar este proyecto. Si en cambio se trata de una legislación de largo plazo, entiendo que no es ésta la forma de considerarla. A las 16 horas recibimos este proyecto que modifica dos leyes fundamentales y se nos pide resolver la cuestión a las 22 horas sin tener en cuenta que deben considerarse los antecedentes jurídicos y la larga y difícil experiencia que la Argentina tiene en esta materia.

El hecho de que se nos obligue a resolver esta cuestión en forma inmediata significa una grave imposición hacia los legisladores. Por ello me inclino a pensar que la demanda del Poder Ejecutivo tiene por objeto resolver la emergencia. Además, digo esto porque conozco lo que está ocurriendo en el país, e incluso lo anticipé con bastante antelación. Además, en la última interpelación, el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos dijo con toda claridad que estamos frente a una gravísima crisis financiera y que el futuro dependía de cómo la resolvieramos, señalando que si no acertamos con el procedimiento podíamos caer en un profundo pozo del cual será difícil salir.

Aun aceptando que estamos frente a una emergencia y que, por lo tanto, la posición a adoptar debería ser la de dar al Poder Ejecutivo los instrumentos necesarios para atender esa urgencia, la duda que subsiste es si lo que se propone resultará útil para ese fin.

Los diputados del bloque de la UCEDE tenemos distintos criterios en esta materia, y no se trata de la forma política de encarar esta cuestión sino de la concepción que cada uno de nosotros tiene con respecto a lo que debemos sancionar. Por un lado, tenemos la clara sensación de que con estos procedimientos no resolvemos la emergencia sino que, por el contrario, la agravamos.

Por otra parte, no podemos expedirnos de modo terminante frente al trabajo que ha estado

realizando la autoridad económica, que ha estado bajo presión pues estas modificaciones son producto de intensas reuniones celebradas en los días de ayer y de hoy, lo que prueba que tanto el Poder Ejecutivo como nosotros estamos legislando mal.

En síntesis, seguiremos escuchando las opiniones que se viertan en este recinto mientras tratamos de fijar nuestra posición definitiva. El señor diputado Ibarbía se referirá a algunos puntos concretos con la idea de que esto no constituye realmente una solución y el final del debate expondremos nuestra postura.

Sr. Presidente (Pierri).—Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Michelli.—Señor presidente: no encuentro mejor manera de apoyar esta iniciativa que recordando las palabras que pronuncié en oportunidad de aprobarse la Carta Orgánica del Banco Central vigente, cuando sus autores consideraron inconveniente lo que ahora se estima imprescindible.

En aquella ocasión estuve de acuerdo con terminar con esa verdadera usina de inflación que eran los redescuentos que a mano abierta otorgaba el Banco Central de la República Argentina. Por eso afirmé lo siguiente: "La lección que extraemos de la experiencia vivida con el Banco Central es que debemos quitarle la posibilidad de convertirse en el 'salvador' de políticas económicas y aun de conductas empresarias irresponsables que generan constantes reclamos de adelantos y redescuentos, y a la vez liberarlo de la dependencia de otros órganos del gobierno y, con ello, de las presiones que le impiden cumplir su misión esencial de preservar el valor de la moneda".

Estas consideraciones respondían a una posición principista, pero como no comparto la "teología del mercado", según la feliz expresión de José Isaacson, también señalé lo siguiente: "La restricción de facultades construye al Banco Central al cumplimiento de su misión y sus funciones específicas. Pero ello no justifica que deban llevarse las limitaciones al extremo de impedir a la institución cumplir cabalmente funciones consideradas importantes y aun típicas de la banca central. En este sentido, encuentro excesivas algunas prohibiciones del artículo 19 sobre préstamos al gobierno nacional y asistencia a las entidades".

Por esta razón, encontré indispensable preservar al Banco Central la condición de prestamista de última instancia. Comparto los temores de quienes no se atrevían a dejar en esa institución facultades que en el futuro podrían ser utilizadas discrecionalmente. Por eso encontré adecuada

una iniciativa del doctor Julio Olivera, un afromado economista, quien sugirió que al considerarse cada año el proyecto de ley de presupuesto se vote una partida para estas mismas finalidades de asistencia excepcional.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Carlos Alberto Romero.

Sr. Michelli.—De tal modo, las autoridades económicas y el Parlamento, monitorizando la coyuntura, estarían en condiciones de salir al cruce de graves problemas financieros. Y deslicé entonces el siguiente comentario: "Parecería que el doctor Olivera confía más en la responsabilidad de los legisladores que nosotros mismos".

Quiero destacar también que esta posición no implicaba una contradicción con nuestra firme convicción de cerrar la canilla de los redescuentos. No había contradicción porque según sostiene en aquel debate: "No legislamos para el día sino para el futuro". Y ese futuro, señor presidente, llegó antes de lo imaginado.

Pero mis prevenciones también se extendieron a otro punto: el relacionado con la garantía de los depósitos. Dije en aquella oportunidad: "Me preocupa la existencia de un régimen de garantía que aliente conductas irresponsables de banqueros y de inversores. La preocupación aumenta si existen políticas liberadas en materia de tasas, y muchísimo más cuando no se dispone de una eficiente supervisión.

"Garantía total o muy amplia, libertad de tasas y escaso control, todo junto representa una absoluta y peligrosísima incoherencia... De aquí se desprende la necesidad de adecuar los regímenes de garantía, pero no eliminarlos totalmente, política que no siguen los mismos países que se toman como modelo de eficiencia bancaria.

"No es justo..." —fue el argumento que empleé entonces—"...que después de estimular en los menos pudientes los hábitos de ahorro, dejemos librada a sus conocimientos financieros la seguridad de sus recursos, a veces los de toda una vida.

"¿Cómo vamos a convertir en principio el supuesto de que todos estamos en igualdad de condiciones para elegir los bancos más eficientes y seguros? ¿Cómo vamos a ignorar que son los pequeños ahorristas los que nunca se enteran a tiempo del derrumbe de una entidad que aparentaba ser sólida?"

Por eso, me declaré partidario de un régimen parcial y oneroso que convendría establecer en una ley específica y para ello sugerí que se

formara una comisión que tendría que expedirse en el término de 120 días.

Como puede apreciarse, soy del todo coherente con el criterio sustentado en 1992 al apoyar las reformas proyectadas.

Una vez más se ha demostrado que por encima de las ideologías, de la ortodoxia y del dogmatismo del color que sea está la razón. En buena hora que se lo haya comprendido, aunque para ello hayamos tenido que llegar a una crisis.

Por último, sería incoherente con la posición que acabo de sustentar si compartiera el criterio de transitoriedad que en un principio se previó para algunas de estas modificaciones. Pensar que los regímenes de redescuento deben autorizarse cuando la crisis se ha producido es como pensar que un cuartel de bomberos debe solicitar el servicio de agua cada vez que estalla un incendio.

Por eso apoyo decididamente la modificación definitiva de los dos textos legales fundamentales que rigen para el sector financiero, en el sentido al que me he referido. En estos términos doy mi voto para la aprobación en general de este proyecto.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas. — Señor presidente: antes de comenzar el análisis de esta iniciativa creo que hay una cuestión fundamental que considerar: tal como viene redactada del Senado, parece que es el resultado del ejercicio de las legítimas atribuciones del Congreso, cuando en el fondo está disimulando la ratificación de un decreto de necesidad y urgencia, que a mi juicio significa una verdadera claudicación del Poder Legislativo.

El despacho parte de la base de aceptar el decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, que lleva el número 290/95, del 27 de febrero último. Tal es así que en el propio texto del despacho se consignan las mismas fechas de vigencia que figuran en el decreto.

Entiendo que previo a todo trámite y teniendo en cuenta lo que establece nuestro régimen constitucional, debe disponerse la nulidad absoluta de este decreto de necesidad y urgencia. Las leyes sólo pueden ser modificadas por el Congreso y no se puede legalizar lo que es ilegal e inconstitucional, por más grande que sea el empeño del Poder Ejecutivo o la proclividad de algunos sectores de apoyar todo lo que proceda del poder central.

Si bien es cierto que el Pacto de Olivos y la reforma constitucional han intentado lega-

lizar estos llamados decretos de necesidad y urgencia —que son verdaderas usurpaciones de facultades inalienables del Congreso de la Nación— también lo es que este decreto ni siquiera se ajusta a las prescripciones constitucionales que hemos cuestionado. La necesidad no surge desde el momento en que el Congreso está en sesiones ordinarias, mientras que la urgencia en sancionar una ley la determina el Poder Legislativo y no el Ejecutivo, asumiendo facultades que no le corresponden.

Además, no se cumple ninguno de los requisitos que establece el artículo 99 que se invoca y, por consiguiente, ante la decisión del Poder Ejecutivo que considero arbitraria e ilegítima, la única medida que podría tomar el Parlamento previo a todo es la declaración de insanable nulidad del decreto.

Si el Poder Ejecutivo considera conveniente modificar una ley y reformar la Carta Orgánica del Banco Central, debería promoverlo por los medios legales y no por su exclusiva y arbitraria voluntad; en ese caso, el Congreso tiene la facultad de aceptarlo o no, porque no es una máquina para votar los proyectos del Poder Ejecutivo.

Hace poco tiempo nos ufanábamos de que se había dictado una Carta Orgánica del Banco Central al que se le habían quitado facultades que se decían eran perjudiciales para la economía nacional; pero resulta que, ante el primer soplo y ante la primera cuestión, todo esto que era la panacea universal se viene abajo y hay que volver al viejo sistema. Tengo mucho miedo, en virtud de algunas referencias, de que este sistema de salvataje pueda ser aplicado en forma arbitraria para beneficiar a los bancos amigos y castigar a los que no se someten.

Además me preocupa que de alguna forma indirecta pueda volver a surgir esta garantía, que no obstante haber sido denominada, en forma declamatoria, onerosa y obligatoria, puede ser en algún momento cubierta con los recursos del fondo fiduciario que se crea. Y resulta realmente sorprendente que para manejar estos fondos, que son del Estado y no de particulares, se nombre una comisión entre cuyos miembros están los propios prestamistas. Es más o menos como si al dictar una ley de impuestos se autorizara a integrar una comisión para el cobro de los gravámenes a los que tienen que pagar.

Nosotros vamos a votar en contra de este régimen, y muy especialmente en lo que se refiere a esta nueva tentativa de terminar con el sistema cooperativo mediante la reforma del artículo 62.

Se habla constantemente de la necesidad de restaurar la confianza, de que la gente tenga credibilidad para revertir esta situación; pero en el mes de noviembre de 1994 el ministro de Economía de la Nación nos dijo que no iban a aceptar los dos últimos tramos del préstamo del Fondo Monetario Internacional, con el argumento de que ese organismo sólo prestaba plata para incrementar las reservas. Entonces, como la Argentina no necesitaba ese aumento, se rechazaba el crédito.

Dos meses después se recorrió el camino de Canosa. Concurrió el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos a esta Cámara y nos dio otra versión de los hechos. Según esa nueva explicación de febrero, la Argentina no utilizaba el crédito del Fondo Monetario Internacional porque dicho organismo decía que era mejor que esa plata se destinara a los países del Este.

¿Cuándo dice la verdad el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos? Ha dado dos explicaciones distintas para el mismo hecho. Así no se puede restaurar la confianza. Además, no se trata de declaraciones vertidas al pasar en un reportaje, sino que son explicaciones brindadas en el seno de la Cámara de Diputados.

También me preocupa el llamado "Empréstito Patriótico". Aquí resulta que los defraudadores del fisco —a quienes se les han radicado denuncias por no haber cumplido con sus obligaciones impositivas o previsionales— han decidido prestar plata al gobierno argentino, cobrando un determinado interés. Es decir que no pagan sus obligaciones, pero se recubren con el ropaje de patriotas mediante préstamos al Estado argentino, por los que cobrarán un interés que nadie conoce, ya que se ha fijado una tasa que estará dos o tres puntos por encima de la LIBOR, que está en aumento. Incluso, como una demostración de confianza, la operación se hace en dólares. Además, tratándose de un empréstito suscrita por argentinos, resulta llamativo que ante cualquier dificultad se haya elegido la jurisdicción del Reino Unido. Como si ello fuera poco, estos generosos prestamistas —que son contribuyentes que no pagan lo que deben— se han asegurado de que si el Estado no está en condiciones de reintegrar esos fondos, podrán imputar el dinero entregado al pago de impuestos futuros.

Este empréstito no puede servir para que el Poder Ejecutivo se vanaglorie del patriotismo de los empresarios, entre quienes hay personas sobre las que pesan denuncias penales por defraudación. Sin embargo, se dice que son los salvadores del país.

Entonces, en estas condiciones es muy difícil solicitar confianza y restaurar el tejido social. Por eso queremos poner fin a esta situación. No es posible que después de haber discuido durante mucho tiempo la Carta Orgánica del Banco Central y luego de haber señalado los aspectos que había que corregir, se diga que esa norma ya no sirve. Además, como si lo anterior fuera poco, hoy a las 15 hemos recibido una copia de las modificaciones que se quieren introducir. Se pretende que los legisladores estén en condiciones de opinar en un lapso muy breve.

Dada la seriedad de la situación, vamos a oponernos a esta reforma de una enorme cantidad de artículos de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y de la Ley de Entidades Financieras, ya que se va a considerar en forma apresurada y sin los elementos necesarios, lo que a mi juicio constituye una grave irresponsabilidad.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

Sra. Kessler. — Señor presidente: solicito la inclusión de un artículo referente a la creación de una comisión bicameral que se encargue de seguir todos los fondos que se van a generar mediante la creación de esta ley y los que integren el fondo fiduciario que se generará para el apoyo a los bancos provinciales.

El Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria tiene una misión importantísima en lo referente a recrear la confianza en la solidez del sistema financiero.

La comisión se encuentra integrada por representantes del Poder Ejecutivo, del Banco Central y por suscriptores del Bono Argentino. Los recursos provienen de organismos multilaterales de crédito. Siendo la masa de dinero muy importante, se requiere el control legislativo, sobre todo si se tiene en cuenta que el fondo espera contar con 2.500 millones de pesos, y que el capital de los bancos privados nacionales ascienda a 3.500 millones de pesos.

Por otra lado, el decreto 445/95 faculta al Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria a suscribir e integrar aportes de capital u otorgar préstamos a entidades financieras, convertibles o no en acciones, a comprar y vender acciones de entidades financieras, a adquirir activos de entidades financieras, a realizarlos en forma gradual y progresiva, y a realizar gestiones y transferencias de activos y pasivos financieros que le encomiende el Banco Central de la República Argentina.

Las facultades del fondo son tales que se hace conveniente un manejo transparente del sistema financiero, debido a las repercusiones que pueden existir en la confianza nacional e internacional. Para ello se torna indispensable la supervisión y respaldo del Poder Legislativo, quien puede certificar la transparencia, legitimar su accionar y ser el vecero del pueblo, lo cual es el cometido de los legisladores ante los funcionarios que gobiernan el fondo.

La comisión deberá pronunciarse sobre el análisis de los criterios con que serán evaluadas las carteras crediticias de los bancos que serán absorbidos o auxiliados con capital, sobre cuáles son las medidas de protección de los ahorristas e inversores en cada caso, etcétera.

Respecto del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, cuyo objetivo es asistir a los bancos de provincia sujetos a privatización y fomentar ésta entre las empresas provinciales, es conveniente monitorear los contratos de fideicomiso respectivos, los criterios de elección, y demás funciones mencionadas en las cláusulas 2º y 6º del contrato de fideicomiso; lo propio debe acontecer con la cláusula 3ª.

También resulta conveniente realizar un seguimiento de las disposiciones establecidas en el recientemente modificado artículo 8º de la ley 24.145.

Por estas razones, en el tratamiento en particular solicitaré la incorporación de un artículo por el que se crea una comisión bicameral de seguimiento de todo lo legislado en esta norma.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). -- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ibarbia. -- Señor presidente: el debate que estamos realizando sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de la Ley de Entidades Financieras me hace acordar al comienzo de la película *Lo que el viento se llevó*. La noticia del comienzo de la guerra entre los Estados corrió inmediatamente con un tono festivo. "¡A la guerra! ¡A la guerra! ¡El país se va a la guerra!" Esa era la voz que se corría, y aquí aparentemente en un tono festivo, estamos diciendo: "¡A la inflación! ¡A la inflación! ¡El país entra en inflación nuevamente!"

Estamos frente a una contradicción flagrante entre las ganas de tener una caja de conversión —que asegure el respaldo de los billetes y monedas en circulación— y las de tener un banco de último recurso. Estamos poniendo una carga de dinamita en el sistema de convertibilidad sancionada en 1991.

En marzo de 1980 —paradójicamente, marzo parece ser un mes fatídico por estos pro-

blemas monetarios y financieros— cae el BIR. Inmediatamente el gobierno de facto de ese entonces advierte que el sistema de garantía no era integral y atribuye a esa falta de integralidad la corrida que se preanunciaba con la caída del BIR. Por eso reforma la Ley de Garantía de los Depósitos Bancarios y extiende dicha garantía a todos los depósitos del sistema sin ningún tipo de límites. En menos de seis meses caen el Banco de los Andes y el Banco Oddone, y el gobierno —mediante la intervención del Banco Central— tiene que emitir por 5.000 millones de dólares, según los más optimistas, o por 7.000 millones de dólares, según los menos optimistas. De esta manera enciende la mecha de la inflación galopante que nos acompaña durante esa década hasta 1991.

"La falta de garantía de los depósitos bancarios fue lo que precipitó la corrida", era lo que se decía en los diarios de aquel momento, que es casi similar a lo que se está manifestando esta noche. Nadie en aquel momento comprendió —y nadie comprende en este momento— cuál es la causa principal de la corrida bancaria.

Los bancos vienen sufriendo esa corrida, que se precipitó y aceleró luego de la crisis de México, por dos causas: una, el temor a la devaluación, y la otra, la desconfianza producida por la insolvencia de una parte importante de los bancos que conforman el sistema financiero argentino.

En un sistema multimonetario como el nuestro en donde circulan o pueden circular a la par del peso otras monedas, el temor a la devaluación tiene como causa el desequilibrio fiscal, ya que una devaluación de la moneda nacional en un sistema multimonetario sería la forma de corregir ese desequilibrio, porque la moneda devaluada —dicho de otra forma, circulando a un descuento— ajusta el desequilibrio de las cuentas públicas. Y este hecho del desequilibrio fiscal era conocido antes de la crisis que se enciende con la devaluación mexicana del 20 de diciembre de 1994.

Nuestro bloque ha venido mezclando con respecto a esa cuestión, no solamente cuando se trató el proyecto de ley de presupuesto de este año, sino cuando se debatieron similares iniciativas correspondientes a los años 1993 y 1994. En aquellas oportunidades votamos negativamente.

No solamente hacia hicapié en esa cuestión nuestro bloque. El ministro de Economía, en oportunidad de abandonar el monitoreo que realizaba el Fondo Monetario Internacional de

las cuentas públicas y de desistir de que el gobierno recibiera las dos últimas cuotas del préstamo que tenía acordado, empezó a asustar al mundo entero diciendo que el país se incendiaba si no se votaban urgentemente algunos proyectos vinculados con determinadas reformas, como ocurrió en el caso del relacionado con el sistema previsional, ya que el desequilibrio fiscal iba a ser incontrolable. O sea que las propias palabras del señor ministro y lo que dijimos en su momento nos expusieron de abundar en esta cuestión. Los que invirtieron sus ahorros en los bancos y a partir de diciembre en previsión de alguna devaluación actuaron de determinada forma, lo hicieron con una lógica y una racionalidad imposibles de rebatir.

La insolvencia de una parte importante de los bancos constituye un problema que no es nuevo. Esto ya lo dijimos en marzo de 1991 cuando se debatió el proyecto de ley de convertibilidad. Si observamos las cifras oficiales de aquel momento veremos que la cartera activa irregular de los bancos oficiales alcanzaba a más del 40 por ciento; ese promedio en los bancos privados alcanzaba al 3 por ciento. En el caso de los bancos extranjeros era menor, ya que llegaba al 5 por ciento, mientras que en los bancos cooperativos, dentro del segmento de los bancos privados, estaba por arriba del 10 por ciento.

O sea que en ese momento los bancos oficiales eran insolventes. Pero como los depósitos fueron creciendo a lo largo de la vigencia del plan de convertibilidad, el problema se fue disminuyendo y entonces nadie le prestó atención.

En 1992, cuando se discute la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central volvimos a machacar con esta cuestión. Les dijimos: "Señores: ustedes están hablando de que el Banco Central no va a actuar como banquero de último recurso. Esto es falso, no es cierto. El Banco Central actuará como banquero de último recurso y va a dar préstamos por 30 días renovables por otros 30 a las entidades que estén en dificultades". ¿Y qué pasa con un banco insolvente que pide dinero por 30 días y luego no lo puede devolver? El problema de liquidez se convierte en un problema de insolvencia, en el que el Banco Central está monetizando la insolvencia del banco al que le prestó dinero. ¿A qué bancos miramos en ese momento? Fundamentalmente a los bancos oficiales.

Esto lo volvimos a decir cuando se discutió la reforma de la Ley del Cheque, reforma que se consideraba indispensable para poder con-

trolar el volumen de crédito que estaba fuera de control. Estábamos discutiendo sobre el aliste del canario cuando el problema de la insolvencia de los bancos era cuestión de fondo. Evidentemente, mirábamos el canal diferente, discutiendo el sistema de los cheques registrables como si fuera la solución, la panacea que iba a simplificar o a resolver las dificultades por las que podían atravesar los bancos. La insolvencia se hizo más manifiesta en cuanto empezaron a perderse depósitos.

¿Qué es lo que hay que hacer con un mal banco? ¿Prestarle dinero? Lamentablemente, si se le presta plata el problema se agrava porque ésta no se recupera. Cuando hay un banco insolvente caben dos soluciones: o el dueño aporta capital, es decir, mejora la situación patrimonial y de este modo cubre la pérdida que significa el quebranto de provisionar los créditos que no puede recuperar, o bien, si no lo aporta, el banco insolvente debe ser cerrado.

Lo que hoy está por aprobar la mayoría —y a lo que votaré en contra—, o sea, crear un sistema de garantía de los depósitos bancarios para tratar de ayudar a sobrevivir a los bancos insolventes, va a significar la monetización de sus carteras activas y regulares.

El Banco Central de la República Argentina cree que el problema de este momento es la iliquidez. Una vez más el Banco Central se equivoca: el problema de este momento es de insolvencia de algunos que se va a transmitir a todo el sistema si se lo quiere disimular.

Esa insolvencia, con la estructura o el sistema inventado por las reformas que nos proponen, tiene dos formas de atenderse: con el crédito público o emitiendo dinero. ¿Con qué crédito público puede atenderse la insolvencia de una parte importante de los bancos cuando el gobierno es incapaz de emitir títulos de deuda y de conseguir que voluntariamente le presten dinero? Se me dirá que existe el Bono Argentino, al que suscribieron unos cuantos para prestarle plata al gobierno. Pero no es serio decir que vamos a resolver el problema de los bancos insolventes con el crédito público del gobierno, que es totalmente insuficiente para la magnitud de este problema.

En cuanto a la segunda forma, fue la que se llevó a cabo en 1980, cuando se emitió por 5.000 a 7.000 millones de pesos, es decir que se expandió la cantidad de moneda, se amplió la base para que ésta se igualara a la oferta monetaria que se venía contrayendo por efecto de la caída de los depósitos bancarios. Y esto es lo que va a ocurrir. Entonces vamos a entender la actitud

de la gente que retira los depósitos de los bancos. Esta gente tiene miedo a un problema de devaluación, fundamentalmente como consecuencia de un desequilibrio fiscal o a la insolvencia de bancos, el segundo desequilibrio que se verifica en nuestra economía.

Lo que estamos diciendo con estas reformas es que vamos a monetizar el desequilibrio de los bancos. Lo monetizaremos como se hizo en 1980, o cuando tengamos que devolver los supuestos préstamos que el gobierno va a conseguir para hacer frente con crédito público a la insolvencia de los bancos. Permítaseme un único comentario referido a lo que se pretende agregar como último párrafo del inciso c) del artículo 17 de la Carta Orgánica del Banco Central aprobada por ley 24.144. Dicho agregado señala que el Banco Central puede, cuando sea necesario dotar de adecuada liquidez al sistema financiero o cuando circunstancias generales y extraordinarias lo hicieran aconsejable, exceder los plazos y montos máximos previstos para dar ayuda a las entidades. En ese caso tiene que recibir garantías de los accionistas, de los dueños de las entidades, que como mínimo deberán ser iguales al capital social de dichas entidades. Además, los socios y directores firman que aceptan el procedimiento de liquidación que se crea por este mismo texto que vamos a considerar.

Pero como el alacrán, el veneno está en el último renglón del párrafo que se pretende agregar. Señala textualmente: "Podrá exceptuarse de este requisito a los bancos oficiales." Los bancos insolventes en el sistema financiero argentino, en su mayoría son los oficiales. Si a los bancos oficiales no se les va a pedir que garanticen patrimonialmente los adelantos que les dará el Banco Central, significa que el Banco Central va a monetizar los quebrantos de esos bancos. En otras palabras, hará lo mismo que en 1980 con el BIR, el Banco de los Andes y el Banco Oddone.

Lo que estaremos haciendo con esta ley es comunicar con un altavoz a todos los depositantes de la República Argentina que retiren sus depósitos cuanto antes para no quedar atrapados, ya que por vía de una emisión sin respaldo les pagaremos con moneda devaluada lo que ellos constituyeron en moneda que todavía tenía algún valor.

Sr. Balestrini (M. A.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Ibarbia. — Ya termino, señor diputado. Sólo me restan dos observaciones y después podrá comentar lo que he dicho. El señor diputado

Balestrini conoce mi forma de pensar sobre este problema.

Creo que hoy triunfa en la Argentina la *banking school*. Esta no es una discusión entre los señores diputados Ibarbia, Balestrini y Olivera; data de dos siglos y se relaciona con la *currency school* y la *banking school*. Se trata de la discusión entre los partidarios de una moneda elástica y los partidarios de una moneda sana y estable que preserve su valor a través del tiempo, libre de la injerencia del poder político; eso es lo que los argentinos deseamos, vía adhesión a la estabilidad.

Se dice que se va a crear un sistema de seguro limitado, obligatorio y oneroso. Cualquier persona que conozca algo de seguros sabe que lo mínimo que debe tener un sistema de seguros es un patrimonio suficiente para responder a los eventuales siniestros. Esto se logra a través del ahorro que se constituye con las primas pagadas antes de que se produzcan los siniestros y la distribución del riesgo cubierto en cada caso. Un sistema de seguros oneroso y obligatorio creado de la noche a la mañana, que no cuente con ningún tipo de constitución de reserva mediante el pago de primas realizado en años de bonanza para cubrir un siniestro que es la pérdida de depósitos que repentinamente se va a producir, terminará siendo financiado por el Estado. El aumento de la alícuota del IVA en tres puntos que sancionamos hace aproximadamente quince días será destinado enterito a cubrir este sistema de seguros, pues no hay un ahorro previo que permita anticipar que existe responsabilidad patrimonial para soportar un siniestro de aquellas características.

Formularé algunos comentarios sobre las reformas que se proyectan introducir a la Ley de Entidades Financieras, pero en particular al capítulo IV que se incorpora al título III de esa ley. El gobierno se quiere curar en salud para poder hacer lo mismo que hacía antes: intervenir las entidades financieras sin tener ningún tipo de responsabilidad patrimonial, lo cual hoy da lugar a miles de juicios. Este sistema conflictivo entre el Banco Central y los propietarios de los bancos que fueron intervenidos en la década del 80 originó una ley "ambulancia" que trató de poner un límite a las obligaciones del Estado en esa materia.

La modificación proyectada no resuelve lo concerniente a la responsabilidad del Estado ante una decisión irracional o infundada por parte de la autoridad de contralor, la superintendencia de bancos ejercida por el Banco Central de la República Argentina. Si el acto

por el cual se interviene un banco y se obliga a vender acciones o utilizar cualesquiera de los instrumentos que se hallan enumerados, es fundado y racional de acuerdo con la ley todo sería perfecto. Pero si el acto es infundado o irracional y como tal se lo ataca de nulidad, la responsabilidad del Banco Central y del Estado en definitiva vuelve a renacer. Entonces, estaríamos reabriendo la puerta a la patria pleitera, que con una ley del año pasado se trató de cerrar para limitar la responsabilidad del Estado.

Esta es una advertencia que formulo frente a estas reformas en las que el peronismo pasó de una fe en la convertibilidad a una fe en el viejo dogma de Perón de la nacionalización de los depósitos. ¿Qué diferencia hay entre el sistema financiero que se va a establecer después de estas reformas y el sistema de nacionalización de los depósitos? La única diferencia es que los bancos no reciben más los depósitos por cuenta y orden del Banco Central, sino que lo hacen por cuenta y orden de ellos mismos. El Banco Central es el banquero de último recurso; es el "pagarini" de esta potencia, pues si los bancos hacen mal las cuentas, en definitiva será esa institución la que se presente a pagar hasta al último depositante.

Con estas palabras dejo fundado mi voto en contra de estas reformas.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Bravo. — Señor presidente...

Sr. Balestrini (M. A.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Bravo. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: no está en nuestro ánimo hacer un debate ideológico en torno de la cuestión que estamos considerando porque respetamos la ideología que cada uno tiene con respecto a estos temas y, además, por entender que ello resulta poco práctico en estas circunstancias.

No obstante, esta metodología de no interrumpir ni entrar en debate cuando se consideran asuntos de esta naturaleza no significa permitir afirmaciones que si no son aclaradas suficientemente por quienes somos sus responsables pueden generar graves —y gratuitos— perjuicios a todos los argentinos, porque son total y absolutamente infundadas.

El dispositivo legal que estamos analizando tiene como finalidad dotar al Banco Central de la República Argentina de los instrumentos adecuados, no para salvar a los banqueros que actuaron mal o irresponsablemente, sino para proteger a los depositantes de recursos en esos bancos y, además, para resguardar el crédito que emerge de esas instituciones.

Además, cuando establecemos la constitución de un seguro de garantías que es complementario —como expresé en el informe inicial— del sistema de protección de depósitos que incorporamos en la ley 24.144, no estamos arriesgando ni en uno ni en otro sistema —como no lo estamos arriesgando en ninguno de los artículos de este proyecto ni en otras iniciativas— la solvencia del Estado ni los fondos que son de todos y que están depositados en el Banco Central en garantía de los pesos que los argentinos tienen en sus bolsillos. Por ello la norma expresamente aclara que establece este sistema de seguros de depósitos sin comprometer los recursos del Banco Central de la República Argentina ni del Tesoro nacional.

El hecho de difundir en este recinto una información distinta de lo que está escrito en los papeles y de lo que vamos a votar perjudica innecesariamente a la Argentina. De todos modos, los argentinos tienen sobradas razones para estar absolutamente convencidos de que de ninguna manera se pondrá en juego el sistema de convertibilidad ni que existe la posibilidad de devaluar el peso, no porque ello signifique proteger los patrimonios más o menos abultados de los banqueros sino porque implica lisa y llanamente cobrar a los trabajadores el peor de los impuestos, reduciéndoles el salario y estableciendo un mecanismo de redistribución del ingreso absolutamente inequitativo, que sistemáticamente fue utilizado en el país hasta que el Congreso votó la Ley de Convertibilidad. Esta garantiza a los trabajadores que nadie sacará parte de sus salarios para financiar otras actividades o para acumular capital y patrimonios en cabeza de otros propietarios. Por todo ello resultaba imprescindible realizar esta aclaración.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Bravo. — Señor presidente: a pesar de su tono convincente, el señor diputado preopinante no llega a dilucidar por qué a tan sólo dos años de la promulgación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina hoy debemos volver sobre lo mismo. Tampoco se ha explicado por qué esta iniciativa ha llegado a nuestro poder a las cuatro de la

tarde ni por qué nosotros tuvimos que enterarnos por medio de un diputado amigo de la realización de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la asistencia del presidente del Banco Central y del señor Lúendo; incluso se hablaba de que también podría venir el señor Maccarone.

Si todo es tan claro y transparente, si en verdad se busca el resguardo de los depositantes y que no suceda absolutamente nada de lo que ocurrió en tiempos pasados, ¿a qué se debe este apuro y esta forma de atropellar con textos legales apenas legibles que llegaron a nuestros despachos a las 16? Asimismo, como va lo señalé, nos enteramos por otro legislador de que se estaba celebrando una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con el presidente del Banco Central, quien vino a brindar explicaciones sobre un texto que indudablemente no compartimos ni vamos a votar afirmativamente.

Tal como lo expresé en la reunión de comisión, esta propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ni siquiera fue puesta a disposición de la Asociación Bancaria — un integrante más de la vida institucional y política argentina —, como gremio directamente interesado en esto, para de ese modo poder escuchar su opinión y recoger su punto de vista.

Al consultar la opinión de quienes son protagonistas dentro de este sistema y pueden aportar toda la experiencia que ha acrecentado su conocimiento verdaderamente se podría apreciar si existen algunas falencias y así prevenir los efectos de algunos conceptos entrecruzados que se dan en esta iniciativa.

Más allá de que este texto fue traído a último momento y de que la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió con la presencia del presidente del Banco Central sin que tuvieran conocimiento de ello todos los señores diputados, hay algunas cosas que desde el punto de vista ideológico los socialistas no podemos admitir. Se trata de esta sensación de que nuevamente las cooperativas están siendo sometidas a esa presión que permanentemente se ejerce sobre ellas desde el Ministerio de Economía. La última fue el impuesto a la riqueza. Hubo que suprimir los artículos 4º y 6º porque indudablemente constituían un avance y un atropello a lo que filosóficamente — fijense que ya no hablo solamente de la norma jurídica — representan las cooperativas.

Ahora nos encontramos nada menos que con el siguiente agregado al artículo 62: "Las cajas de crédito y bancos comerciales que revistan la forma jurídica de cooperativa o de asociación civil podrán transformarse en sociedades anóni-

mas..." —éste es un enunciado donde hay una voluntad de sus integrantes de poder hacerlo si es que así lo pretenden— "...a requerimiento del Banco Central de la República Argentina, cuando ello resulte indispensable a los fines previstos por el artículo 35 bis..."

Pero resulta que el artículo 35 bis dice: "Cuando a juicio exclusivo del Banco Central una entidad financiera se encontrara en cualquiera de las situaciones previstas por el artículo 44, aquél podrá autorizar su reestructuración en defensa de los depositantes, con carácter previo a considerar la revocación de la autorización para funcionar. A tal fin, podrá adoptar cualquiera de las siguientes determinaciones, o una combinación de ellas..."

Advertan que además de la modificación que se pretende establecer con relación al artículo 62, que es desde todo punto de vista arbitraria, nos encontramos con otro agregado: "A los fines del presente artículo déjase sin efecto la prohibición de transformarse del artículo 6º de la ley 20.337, de cooperativas".

Está mal redactado, pero en definitiva quiere decir que el artículo 6º de la ley 20.337, de entidades cooperativas, que prohíbe la transformación, va a ser derogado mediante estos párrafos del artículo 62. Vale decir que estamos frente a un verdadero avasallamiento del movimiento cooperativo.

Sr. Balestrini (M. A.). — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Bravo. — Sí, señor diputado

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: la interrupción que le he solicitado al señor diputado Bravo seguramente servirá a los fines de su exposición, porque como producto de las observaciones que ha formulado y de las que han planteado el bloque de la Unión Cívica Radical y otros sectores de esta Cámara, el agregado al que está haciendo referencia el señor diputado preopinante será modificado, en especial el aspecto al que aludí dentro de ese agregado, que ha sido eliminado.

Por ello, le pido al señor diputado Bravo que durante el tratamiento en particular volvamos a analizar esta cuestión, porque estoy convencido de que coincidirá con la redacción definitiva que apunta a impedir que por su forma jurídica una cooperativa que es entidad financiera, no pueda recibir los recursos para seguir funcionando, crecer y mejorar, y a la vez que

ello no vulnere los principios fundamentales del cooperativismo en los que fundamenta su oposición el señor diputado Bravo.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Bravo. — Muchas gracias por la aclaración señor diputado; quisiera decirle que eliminaría todos estos párrafos que se pretenden agregar al artículo 62 y no solamente éste. Entiendo que en la ley 20.337 está la solución para que las asociaciones cooperativas puedan encontrar el camino para crecer y proyectarse, tal como lo explicita el artículo 5º de la aludida norma.

Por lo tanto, no tengo ningún inconveniente en aceptar su explicación, aunque aclaro que el tema lo hemos conversado con el señor diputado Polino, quien durante el gobierno del doctor Alfonsín fue secretario de Acción Cooperativa. La cuestión, de alguna manera, fue traída al seno de la comisión, cuando el presidente del Banco Central, el doctor Roque Fernández, mencionó que algunas entidades cooperativas habían pedido ser transformadas en sociedades anónimas. Hemos realizado algunas consultas y no podemos admitir que tres, cuatro o cinco entidades, o la cantidad que fuera, puedan violentar lo que es el movimiento cooperativo.

Antes de proceder a efectuar cualquier modificación deben ser consultadas las cooperativas para que den sus opiniones, al igual que tendría que hacerse la consulta a la Asociación Bancaria sobre esta reforma que se pretende introducir.

Durante la consideración en particular, será el momento de discutir acerca de las observaciones que vamos a formular.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Leconte. — Señor presidente: el proyecto sancionado por el Senado modifica la Carta Orgánica del Banco Central, en cuya redacción hubo un consenso generalizado de los bloques, y esta mañana nos informamos de la considerable ampliación de las disposiciones de esa sanción que estamos tratando.

Esta iniciativa del Poder Ejecutivo crea el seguro de garantía para los depósitos, modifica la Carta Orgánica del Banco Central —ley 24.144— y también en numerosos aspectos la Ley de Entidades Financieras. Esta compleja reforma tiende a atacar uno de los problemas más graves que afectan al país: la crisis de confianza que ha estimulado la salida de los depósitos, tanto del ahorro nacional como del ca-

pital extranjero, lo cual pone en serio riesgo toda la política económica vigente.

Incluso los entendidos sostienen que el mes de abril será un mes clave para consolidar nuestro sistema o para desencadenar una eclosión que nadie quiere.

Frente a esta rápida iniciativa del Poder Ejecutivo que tiende a la búsqueda de la confianza, el Parlamento argentino ha respondido positivamente ejerciendo su responsabilidad. Y aquí están todos los bloques para manifestar la adhesión o la crítica, pero puntualizando su presencia para el rápido debate aunque sin el conocimiento a fondo de los temas que están en discusión.

El Poder Ejecutivo ha pedido al Parlamento herramientas para recuperar confianza en el país y fuera de él. En nombre de los bloques del Partido Autonomista y del Partido Liberal de Corrientes, queremos decir que en estas circunstancias precarias no podemos ahondar en el estudio de la iniciativa, pero ante el pedido, por parte del Poder Ejecutivo, de una herramienta en momentos difíciles para el país, vamos a votar por la afirmativa este proyecto. Luego vamos a reclamar y exigir al Poder Ejecutivo la rendición de cuentas por el uso que haga de esta norma.

Ojalá que estas medidas que pretenden atacar la crisis no sean permanentes. Ojalá que la confianza vuelva. De todos modos, el Poder Ejecutivo debe asumir su responsabilidad, porque esta pérdida de confianza no sólo proviene de México, sino del desequilibrio de nuestro propio presupuesto. Con estas consideraciones adelanto nuestro voto por la afirmativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Balter. — Señor presidente: nuestra intervención será muy breve. También quiero adelantar el voto por la afirmativa a este proyecto. Lo vamos a hacer con una reflexión, porque hace tiempo insistimos en lo mismo.

Teníamos un enfermo que presentaba —quiero referirme a la situación en términos médicos, aunque no lo sea— cálculos en la vesícula y que podría haber sido operado mediante una intervención laparoscópica, que es una cirugía muy sencilla que nos permite volver a la normalidad en menos de 24 horas. Sin embargo, hemos sido tan desaprensivos y descuidados y nos hemos sentido tan seguros de nosotros mismos, que hicimos caso omiso al consejo mayoritario de los médicos. Nos dejamos estar y, por ello, ahora nos encontramos en terapia intensiva, sufriendo

una pancreatitis aguda y sin saber cuál será el tratamiento.

En la desesperación de este cuadro clínico estamos creando instrumentos de toda naturaleza. Esto es lo que nos ocurre hoy, como bien ha expresado el señor diputado preopinante. Ante la emergencia todos vamos a brindar nuestra cooperación, pero debemos entender definitivamente que lo que nos sucede surge de un concepto elemental, como es el de gastar más de lo que se recruta.

Si no comprendemos esta cuestión no podremos solucionar el problema financiero y de confianza en la inversiones en la Argentina. Tampoco podremos superar el problema más grave que tenemos los argentinos y que consiste en el récord histórico de desempleo que vivimos. A fin de solucionar no sólo las dificultades que estamos analizando, sino también las que presenta la economía de la República, recomiendo leer un espectacular artículo de Germán Sopena, publicado por el diario "La Nación" en el día de hoy.

Si no hacemos en esta reflexión y si no nos damos cuenta que hemos duplicado el gasto público desde 1991, seguramente no encontraremos explicaciones a muchos de los problemas que están sucediendo. Si el señor presidente del Banco Central de la República Argentina hubiese tomado en cuenta lo que le señalábamos en el momento indicado, cuando estaban analizando el presupuesto, seguramente el Poder Ejecutivo ahora estaría pagando un costo sensiblemente menor al actual.

Ale voy a permitir leer por segunda vez la versión taquigráfica de la reunión en la que estuvo presente el doctor Fernández. Ello ocurrió a fines de septiembre o principios de octubre de 1994 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En consecuencia, mucho antes de la crisis de México preguntábamos al señor presidente del Banco Central de la República Argentina si se había previsto alguna red de emergencia para el caso de que durante el año 1995 se agudizaran los inconvenientes que ya se observaban en la economía y los bancos tuvieran algunas urgencias. Queríamos saber si en ese caso el Banco Central iba a hacer algo.

El señor presidente del Banco Central, entre otras consideraciones, respondió: "En relación a si va a existir una red de emergencia para bancos de provincia, es evidente que la misma ley que sancionó este Congreso impide al Banco Central actuar como red de seguridad. Creo que la ley es muy sabia y no es prudente que el Banco Central sea la red de seguridad de los sistemas".

¡Qué distintas son las reflexiones que ahora hace el presidente del Banco Central!

Por otra parte, algunas de las cosas que se van a modificar de la Ley de Entidades Financieras —como ampliar la base de lo que tiene certeza de cobro, siempre y cuando alcancen los encajes de las entidades liquidadas, si bien no están absolutamente garantizados los depósitos de hasta cinco mil pesos, como alguien informó— constituyen un acto no digo demagógico pero sí que no se compadece con la realidad, porque si esto explota, seguramente lo que sucederá es que serán menos las personas que podrán recuperar sus depósitos.

Nos parece bien que se ponga en un plano de igualdad a quienes tienen depósitos en pesos con aquellos que los tienen en otras monedas, pero pasar de tres a cinco mil pesos no es más que un mensaje quizá para sorprender la buena fe de los depositantes, porque no tiene ningún fin práctico.

No comparto las críticas que se efectúan al sistema de seguro. Creo que es muy bueno; por supuesto que no servirá para esta coyuntura, pero si proyectará un sistema que puede ser muy saludable en el futuro. En este sentido, y para lo cual llamo la atención de los responsables de su instrumentación, nos gustaría que este sistema escape al Banco Central, pudiendo ser constituido a través de una sociedad anónima, por medio de aportes que serían realizados por aquellos que tuvieran interés en integrarla. No obstante, el Banco Central tendrá que cumplir con su rol de superintendente.

Si todo esto se hace bien, quizá sirva como elemento de certeza y confianza para que el sistema funcione normalmente, como ocurre en muchos otros países.

Oportunamente hicimos hincapié en la labor que debe desarrollar el Banco Central; esto es, el poder de policía, el de superintendencia. Si éste se hubiera ejercido correctamente en su momento, otra sería la situación actual, otros serían los costos con los que nos estaríamos encontrando.

En definitiva, en nombre del bloque Movimiento Popular Jujeño, y del bloque Demócrata de Mendoza, adelanto que votaremos en forma favorable el proyecto en consideración, solicitando que al momento de instrumentarse esta medida se tengan en cuenta las reflexiones que acabamos de formular.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Dumón. — Señor presidente: nuestro bloque, a través del señor diputado Olivera, ya

adelantó en este recinto por qué razón estamos en contra de esta iniciativa: no sólo por los aspectos analizados, sino también por los agregados que hemos conocido recién en las últimas horas. Faltaría precisar algunos aspectos. Hemos escuchado a los distintos sectores y ahora nos encontramos con que quienes elogiaban esta política económica por parte del liberalismo, hoy critican las tímidas medidas que en otra dirección pareciera intentar tomar el gobierno en materia bancaria en medio de un evidente fracaso. Es que la incoherencia tiene este destino trágico: no solamente se fracasa sino que también se pierden las banderas.

Lo que le pasa a la Argentina hoy no consiste solamente en un problema bancario, sino en que parece una crisis económica muy importante. Dicha crisis se ha producido porque durante todos estos años ha habido una traslación gigantesca de recursos hacia sectores minoritarios, particularmente hacia el sector servicios, en desmedro de la producción y el trabajo.

Es cierto que esa ausencia de trabajo y de producción se fue cubriendo con esos fondos que parecían venir alentosos y llamados por el "milagro argentino". Pero en el fracaso descubrimos que no existía tal milagro, ya que los fondos no venían y además no teníamos producción.

La estabilidad ha sido para algunos. Para otros ha sido la quietud de los cementerios. Así están la producción primaria, las producciones regionales y la industria que se halla devastada.

Existe una crisis bancaria, porque se ha quebrado el sistema. El índice de mora que tiene el sistema es altísimo, debido a las dificultades económicas que padecen en la Argentina la producción y el comercio.

Hace poco, cuando tratábamos el proyecto de ley vinculado con el impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso productivo, decíamos en este mismo recinto que la mora del crédito bancario exclusivamente correspondiente al sector primario rondaba los 1.500 millones de dólares. Entonces, cuando se produce el fenómeno de México, ¿cómo nos encuentra a nosotros? Con una caída en la producción y, además, con un incremento del gasto público que no se ha podido justificar desde ningún punto de vista. Se trata de un gasto inútil que solamente ha servido para fomentar y mantener nichos dentro de la estructura gubernativa, que han sido alimentados por el presupuesto nacional por parte de un gobierno central que ya no tiene servicios esenciales para dar a la gente,

porque los ha transferido a las provincias y a los municipios.

México no fue solamente un episodio más, sino un detonante que indicó que el rumbo de la Argentina estaba equivocado ya desde antes. La Argentina, antes de México, ya era analizada como un país de riesgo. Y cuando se produce la devaluación del peso mexicano la actitud del gobierno consistió en especular con su imagen, en lugar de anticiparse a los hechos. Observaba cómo lo veían en las negociaciones algunos comunicadores que son *showmen* de la televisión, para analizar luego cuál era la medida que se tomaba ese día. Pero de ninguna manera eran las medidas que estaba esperando la sociedad argentina para anticiparse a la crisis. Por eso pasa por aquí la dolarización de los depósitos. ¡Total... nos iba tan bien! Esto demostraba coraje, decisión y que a la Argentina no le pasaba nada.

Así terminamos en los tristes episodios vinculados con la resolución del Banco Central del 17 de marzo donde se dice que no se pagarán los cheques de las entidades que tienen saldos deudores en dicho banco. Para esto el propio ministro de Economía, allí sentado, con sus colaboradores, se había encargado en la noche de la interpelación en esta Cámara de echar un balde de nafta al incendio diciendo que solamente tenía 200 millones de pesos para responder como garantía de los depósitos bancarios.

En esto hemos ido de improvisación en improvisación y con superficialidad, y luego, de la mano de esta superficialidad, la contradicción. En este marco viene al recinto, con sanción del Senado, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que el miércoles pasado dejamos de sancionar porque ya en ese momento el gobierno sabía que lo que había aprobado la Cámara alta no le alcanzaba para resolver la crisis. Efectivamente, desde hacía meses veníamos pronosticando esto; desde cuando llamamos la atención a la sociedad argentina sobre la necesidad de que viniera aquí el ministro de Economía, porque no era un capricho de la bancada radical sino que la situación era muy difícil. Pero el miércoles pasado se produce el episodio porque ya no alcanzaba lo que el Senado había sancionado. Entonces tuvieron que parar y esperar una semana, y es así como en las últimas horas recibimos estas propuestas de ampliar las facultades del Banco Central.

Pero ocurre que nos encontramos con la situación de que estamos llegando tarde a todos los episodios y en cada uno de ellos estamos generando inseguridad. Aquí se habla de la crisis de confianza. Pregunta: ¿quién provoca más crisis

de confianza hoy en la Argentina que las actitudes de este gobierno que improvisa, que se contradice y que cambia todos los días? ¿Quién genera más inseguridad? Observando cómo se hacen las cosas uno casi tendría derecho a suponer, si no fuera que es descabellado, que ciertos efectos han sido provocados por alguna mente y con alguna intención, persiguiéndose un determinado objetivo.

El presidente del Banco Central, quien tuvo la delicadeza de venir hoy a informarnos en la comisión, dijo que el 80 por ciento de la banca no tiene dificultades y que se renueva el 90 por ciento de los depósitos. Esta segunda afirmación es muy grave porque las mediciones se hacen por mes, es decir que se está perdiendo el 10 por ciento de los depósitos mensualmente. Pero, ¿quiénes son los que están perdiendo los depósitos? ¿Qué destino tienen los depósitos que se van? La que está perdiendo los depósitos es la banca privada pequeña, particularmente del interior del país. Esa banca privada que muchas veces presta caro pero que es la única que tienen a mano el pequeño industrial, el productor, el comerciante, allí donde no llega la banca internacional ni tampoco la gran banca nacional y la del Estado.

En muchas provincias el Estado solamente ya es un rígido banco de la Nación porque, en muchos casos, por esta apropiación de recursos que reiteradamente la Nación le ha hecho a las provincias, ha caído junto con las dificultades de los gobiernos provinciales la banca que muchas veces era el amparo para el productor local. Es decir que hoy existe un fenómeno que nosotros tenemos que señalar: las dificultades no han sido para todos; las dificultades más grandes van a ser para algunos que han sido mal administrados. No vamos a defender a los que han sido mal administrados, pero sí es nuestro deber defender a los que se administraron bien y que por una crisis sistémica en la cual es parte responsable el gobierno, están pagando las consecuencias. No me refiero sólo a la banca privada, a la banca cooperativa del interior; estoy hablando de ese chacarero, de ese comerciante, de ese industrial, de ese profesional del interior que se quedó sin crédito cuando cayó su banca privada y al que también se le cortó la cadena de pago.

No estamos defendiendo banqueros, estamos defendiendo depositantes y también las posibilidades de ese sector de la economía nacional que hasta ahora parecía que quería arreglar con dogmatismo y con soberbia cada uno de los funcionarios del Ministerio de Economía.

¿Cómo sigue esta película, señor presidente? Ahora nos proponen un seguro; hace tres años

de la mano del diputado Olivera, la Unión Cívica Radical lo sugería, como lo volvimos a hacer hace muy poco tiempo. Nosotros no tenemos miedo ni a estatizaciones ni a cosas raras, y recordamos a los ultraliberales que estos mecanismos se usan en las países centrales más desarrollados de la Tierra. El seguro es de aquí para adelante, es decir, para los sobrevivientes. Cabe preguntarse qué pasa con aquellos banquitos cooperativos o de la banca privada del interior que desde hace cuarenta o cincuenta días están trajinando para ver si se pueden fusionar y nadie les contesta porque también se han cerrado las respuestas del Banco Central; y los pueblos viven azorados porque se les cierra el banco del lugar. Viven con verdadera conmoción social esa ruptura de la cadena de pagos y el cierre del crédito. Qué hacemos con ese banco que estaba bien administrado pero que con todo este imprudente desmanejo se fue quedando sin ninguna posibilidad de operar. Le vamos a dar estas normas. ¿Cuál va a ser la conducta de los funcionarios para aplicarlas? La que tuvieron hasta ahora, o una conducta de rescate de las entidades financieras que sirva para otorgar créditos y fomentar la inversión y la producción primaria regional o industrial, que hoy más que nunca necesita la Argentina. Esta aventura de sustituir la producción por importación de capitales golondrina nos crea ahora la necesidad dramática de que la Argentina produzca a efectos de que haya superávit en su balanza comercial y sustituir ese monto con bienes exportables y de producción, con posibilidad transable. Me pregunto si ello vamos a lograrlo mediante estas normas.

Nos hubiera gustado que en la reunión que en horas de la tarde mantuvimos con funcionarios del Poder Ejecutivo y con legisladores de la mayoría ellos hubieran expresado —al margen de toda especulación o cálculo electoral— que mediante estas normas la Argentina asumirá el compromiso de reconquistar y reconstruir el crédito a efectos de ponerse de pie para producir, trabajar e invertir; que por lo menos se cumpla una milésima parte de las promesas que durante la campaña electoral se hicieron con respecto a la producción.

En cambio, traemos un mensaje de alarma frente a esta crisis, pues algunos gastaron mucho y ahora tenemos que pagar entre todos, aunque en el sistema hay condenados: algunos van a pagar más que otros. También la va a pagar más alguna banca que otra.

Hoy se van a sancionar estas leyes. El radicalismo ha venido aquí a cumplir con su deber, a traer sus aportes; debemos reconocer con

hidalgúa que algunos de ellos han sido receptados. Hoy llevamos adelante un diálogo constructivo y beneficioso; lamentablemente, ha habido una demora de muchos años en la obtención de este diálogo imprescindible.

Esperamos que en la aplicación de estas normas exista la auditoría parlamentaria para impedir que la soberbia de los funcionarios exceda los límites de la sensatez y de la racionalidad —como ha sucedido en estos años—; que haya mayorías especiales para que los funcionarios pongan sus impresiones digitales en cada resolución a fin de que los redescuentos no sean un calvario, una tortuosa cadena que deben transitar las entidades, es decir, que haya un procedimiento transparente que se pueda mirar a la luz del día.

Apostamos a que además de esas mayorías especiales se agreguen otros conceptos que nos dejen bastante más tranquilos. Como señalaran los señores diputados Bruno y Polino, me pregunto cómo es posible que de la mano de una modificación a la Ley de Entidades Financieras y a la Carta Orgánica del Banco Central se realice, sin mediar explicación alguna, una reforma de semejante magnitud al régimen legal de las cooperativas. Al respecto quiero manifestar lo siguiente.

La contestación fácil y superficial consiste en decir: no vamos a poner nada porque los diputados se enojan; además, algunos diputados —reiterando discursos que han pronunciado durante estos años— son antiguos. Se trata de ser modernos. Entonces, a estos diputados antiguos se les ocurre defender el cooperativismo en la Argentina. Por lo tanto, vamos a eliminar este artículo. El efecto que consiguen sacando este artículo es que las entidades cooperativas no logren redescuentos porque no pueden garantizarlos con su estructura. Entonces, nos van a echar las culpas a nosotros. Si buscaban un culpable, aquí está. Aquellos que salimos a defender el sistema cooperativo seremos los culpables de haber impedido esta transformación. Este es el curioso modo que durante estos años ha tenido el oficialismo de distorsionar los términos del debate argentino.

Por ello llamamos a la reflexión, ya que no se trata de eliminar un artículo sino de buscar formas que no priven a las cooperativas de los redescuentos indispensables para seguir funcionando, porque el país las necesita. De lo que se trata es de buscar maneras de respetar la idea, la forma y el funcionamiento del sistema cooperativo.

No es necesario transformar a las cooperativas en sociedades anónimas; se les puede dar la posibilidad de asociarse e integrarse en organismos de segundo grado para que, además de contar con determinadas facilidades, tengan el compromiso por parte de las autoridades del Banco Central —si realmente con esta herramienta se quiere iniciar una política en serio— de que se les va a dar un trato preferencial.

Si logramos obtener el compromiso de mirar el interés general y no los resultados del 14 de mayo, este debate se constituirá en uno de los más fructíferos que se hayan dado en la Cámara de Diputados, porque habrá alcanzado el cambio que todos esperamos de parte del gobierno nacional. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Romero, C.A.).— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Polino.— Señor presidente, en nombre del interbloque Alternativa Federal —compuesto por el Frente Grande, PAIS y la Unidad Socialista—, he de referirme a un aspecto del proyecto en consideración que es de vital importancia para el futuro del movimiento cooperativo de crédito y para los bancos cooperativos.

Por supuesto, no coincidimos con la redacción propuesta para modificar el artículo 62 de la Carta Orgánica del Banco Central —hecho del que nos enteramos en horas de la tarde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda—, ya que una medida de este tipo no se puede llevar adelante sin la consulta previa con los propios interesados.

La ley 20.337 fue redactada por una comisión constituida en su momento por las mejores cabezas del movimiento cooperativo, ya que estuvo integrada por los doctores Arturo Vainstock, una verdadera institución que trasciende las fronteras de nuestro país; Manuel Domper, desde hace muchos años miembro del directorio del Banco Central de la República Argentina, concretamente, a partir de 1989; Constancio Francisco Beltrano, quien no sólo goza de prestigio en la provincia de Córdoba sino en todo el país, y Dante Osvaldo Cracogna, de reconocida actuación en el movimiento cooperativo internacional y por supuesto de nuestro país. Es decir que se trata de una ley que no surgió del Parlamento sino del movimiento cooperativo, y que, como toda norma jurídica, es perfectible, pero que no puede ser modificada por la vía del tratamiento apresurado de un proyecto, como se pretende en esta sesión. Esto no se puede considerar sin un trabajo profundo en comisión y sin consultar a todas

las partes interesadas, o sea a las diversas ramas del movimiento cooperativo —incluso a las distintas ramas del movimiento cooperativo de crédito y bancario— y a los propios trabajadores de la organización sindical, como ya se señaló.

Vamos a disentar con el agregado al artículo 62 de la Carta Orgánica, como asimismo con la propuesta que acaba de señalar el señor diputado Dumón, porque cualquiera sea la redacción que se acuerde, en el fondo se estará modificando la ley, y si abrimos la puerta a la operatoria de carácter comercial, podemos colocar a esta rama del sector cooperativo, que efectivamente hoy está pasando por serias dificultades, en una situación aún peor.

Afirmo que nos oponemos porque, en realidad, si se leyera con atención el texto de la norma en vigencia, se encontrarían los remedios a la situación que hoy se quiere revertir. El artículo 4º de la ley 20.337, que define al acto cooperativo, dice así: "Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por aquéllas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales.

"También lo son, respecto de las cooperativas, los actos jurídicos que con idéntica finalidad realicen con otras personas." La disposición se refiere a personas de otro carácter jurídico: sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, etcétera.

El artículo 5º de la mencionada ley se refiere a la asociación con personas de otro carácter jurídico, y dice así: "Pueden asociarse con personas de otro carácter jurídico, a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no desvirtúen su propósito de servicio." Además, el artículo 6º agrega lo siguiente: "No pueden transformarse en sociedades comerciales o asociaciones civiles. Es nula toda resolución en contrario." Esto significa que los hombres que redactaron esta ley fueron tan previsores al calor de las nuevas modalidades que imperaban en el mundo en la década del 70, que abrieron la posibilidad de asociación con personas jurídicas de otra naturaleza. Prueba de ello es que no mucho tiempo atrás y durante el actual gobierno se constituyó el Banco BICE, donde se ha integrado un conjunto de seis bancos cooperativos, lo que no fue impedimento para que, tanto el Banco Central como la autoridad de aplicación, el INAC, lo dieran la matrícula correspondiente.

Considero que el paso que se va a dar esta noche será muy grave. Sé que tiene asegurado el éxito porque así lo ha expresado tanto el representante de la bancada mayoritaria, señor

diputado Balestrini, como el señor diputado Dumón; pero queremos dejar sentada claramente nuestra posición con vistas al futuro, manteniendo los principios y la doctrina que están expresamente consignados en la ley 20.337. Para llevar a cabo este salvataje del que se ha hablado no es necesario modificar el texto de la ley. El señor diputado Balestrini ha dicho en una interrupción que posee un texto distinto al que ha enviado el Poder Ejecutivo, que no conocemos, no tenemos sobre nuestras bancas. No se puede improvisar en una cuestión tan importante y trascendente.

¿Por qué hay tanto apuro? ¿Por qué no llevar esta cuestión a la comisión respectiva donde podamos analizarla detenidamente, donde se puedan citar a las diversas federaciones vinculadas con este tema para conocer su opinión, apreciar los pro y los contra, para luego, si existe consenso o se cree que es realmente conveniente, modificar la ley? Pero no procedamos de esta manera, porque podemos cometer un error irremparable para el sector cooperativo.

La crisis de que se ha hablado es de política macroeconómica. ¿Cómo no van a estar en crisis la banca cooperativa y las cajas de crédito si se nutren de los sectores medios de la sociedad, de los pequeños y medianos productores agropecuarios, comerciantes e industriales, que hoy son los que pagan con mayor dureza la crisis económica y social?

Por supuesto que si el sector social del que se nutre esa banca está sufriendo las consecuencias de esta crisis, es lógico que eso repercuta en las entidades. Entonces, para resolver este tema no abramos una puerta que puede conducir a la liquidación de este sector de la economía social, porque el problema es de fondo.

Hay que modificar medidas que se vinculan con la política macroeconómica. Como pregunté cuando se trató el tema de las nuevas modalidades de la contratación laboral y el régimen de flexibilización para los trabajadores respecto de las pequeñas y medianas empresas, si realmente se desea impulsar el empleo en el país, ¿por qué el Poder Ejecutivo dictó el decreto 2.015, que liquida las cooperativas de trabajo, que son pequeñas y medianas unidades productivas?

Por medio de aquella norma del Poder Ejecutivo y de la que han redactado ahora —no conocemos en definitiva el contenido— vamos a liquidar seguramente a las cajas de crédito y a los bancos cooperativos. ¿Qué sentido tendrá que mañana actúen como sociedades anónimas? Mediante este subterfugio habrán perdido la esencia que las caracteriza y que les da una razón de ser en el proceso económico y social del país.

Ya hemos visto que en cuatro proyectos distintos del Poder Ejecutivo y en muy poco tiempo se trató de gravarlas con el impuesto a las ganancias, y una y otra vez esta Cámara rechazó la pretensión del Poder Ejecutivo. Pero no sabemos con qué otro pretexto van a tratar de gravar otra vez, injustamente, a las cooperativas, en sus diversas ramas y manifestaciones.

Hoy, con este pretexto de modificar la Carta Orgánica del Banco Central, directamente el Poder Ejecutivo amolda el artículo 6º de la ley 20.337 y dice que pueden transformarse en sociedades anónimas. Hay aquí —y si yo dispusiera de tiempo, podría señalar toda la política coherente que ha llevado a cabo el Poder Ejecutivo— una verdadera intencionalidad; no se desperdicia oportunidad para avanzar y reanudar la ofensiva en contra de este sector de la economía social, que funciona practicando la verdadera democracia y que además ha contribuido enormemente al desarrollo del interior de la República.

Por estas razones vamos a votar en contra de este régimen tal como ha venido redactado del Poder Ejecutivo, y también de un artículo que no sabemos cómo está elaborado pero, por lo que han dicho los señores diputados al fundamentarlo, trata de abrir una puerta que, al destruir la esencia doctrinaria, lo conceptúa altamente peligroso.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: a continuación vamos a votar en general este proyecto y quiero señalar, como miembro informante, que he escuchado las buenas exposiciones que han realizado los señores diputados durante su consideración. Sólo quiero hacer referencia a tres aspectos que considero imprescindible aclarar, para dejar registrada así la posición del bloque que represento.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. Balestrini (M. A.). — En primer lugar quiero dar lectura al artículo referido al tema de las cooperativas, cuya redacción surge del debate que se ha realizado en estos días en relación con el tema. El texto propuesto por la comisión es el siguiente: "En los casos previstos en el artículo 44, inciso c), las cajas de crédito y bancos comerciales que revistan la forma jurídica de cooperativa o de asociación civil podrán transformarse en sociedades anónimas o constituir una sociedad anónima para transfe-

rirles el fondo de comercio a los efectos del ejercicio de la actividad financiera, con la aprobación del Banco Central de la República Argentina.

"Cualquiera sea el tipo societario, en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 35 bis los socios o accionistas podrán ejercer el derecho de receso, resultando inaplicables las disposiciones de los artículos 78, 245 y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales."

En relación con este punto, queda claro que la intención de esta norma —perfeccionada por el aporte de diputados de otros bloques— no es la de perjudicar al sistema cooperativo que cumple funciones de intermediación en el mercado de capitales. Nuestro objetivo es diametralmente distinto. Se trata de que la forma jurídica de las cooperativas no interfiera en la solución de los problemas que esas mismas entidades desean resolver.

Sr. Bravo. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Balestrini. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Bravo. — Señor presidente: no quiero ingresar a un debate que, desde el punto de vista de las observaciones que nos merece a cada uno, podría tener otra significación.

La ley 20.337, referente a las cooperativas, no interfiere ni produce ninguna situación anómala en la solución que se busca; por el contrario, las dificultades se pueden superar por medio de los artículos 5º, 6º y 7º de la propia Ley de Cooperativas. Por ello solicitamos, fundamentalmente, que el artículo leído por el señor diputado Balestrini desaparezca de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

Si ya en la ley especial de estas organizaciones existen artículos que protegen y permiten a las cooperativas no solamente superar la crisis sino asociarse para proyectarse, ¿para qué modificarla? En la misma ley tenemos la solución que buscamos. Respetemos lo que constituye una asociación cooperativa.

Por otra parte, en un Estado democrático y de derecho es indispensable consultar a los integrantes de estos movimientos —que no persiguen fines de lucro— antes de introducir cualquier modificación. En la propia Ley de Cooperativas está el elemento que permitiría conjurar la crisis de estas entidades, a fin de

proyectarse y crecer. Recurriendo a dicha norma no necesitamos modificar absolutamente nada.

Respetemos la voluntad de los ciudadanos que se reunieron para constituir estas asociaciones cooperativas. Ellos merecen toda nuestra consideración. Suprimamos el artículo 62 del proyecto a fin de estar en consonancia con un Estado democrático y republicano, que busca su consolidación.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.) — Seguramente en el tratamiento en particular volveremos sobre este tema. Durante esta consideración en general quise dejar en claro la posición del bloque que represento.

Queremos defender el sistema cooperativo. Ojalá que en el futuro de la organización económica de los argentinos haya muchas empresas y unidades productivas que se organicen sobre la base de los principios del cooperativismo universal. La incorporación de esta norma apunta únicamente a preservar estas entidades. De ninguna manera busca su debilitamiento.

En segundo lugar, incorporamos en los dispositivos de esta iniciativa un control parlamentario por medio de una comisión bicameral que tendrá amplias facultades a los fines de control de los instrumentos en sus aspectos discrecionales.

Por último, desco destacar que me siento realmente orgulloso de participar de una Cámara donde todos los diputados exponen sus criterios y propuestas con toda la vehemencia que surge de las fuertes convicciones. De esta forma, debo dejar expresado que ningún señor diputado ha retaceado el esfuerzo de trabajo para que todo el país cuente con la mejor solución posible y con los instrumentos que se requieren para hacer frente a la crisis financiera que estamos viviendo.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar en general.

— Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración en particular el artículo 1º.

Por Secretaría se dará lectura del texto propuesto por la comisión.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Dice así:

Créase el Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos que será limitado, obligatorio y oneroso, con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos ban-

carios, en forma subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y protección de depósitos establecido por la Ley de Entidades Financieras, sin comprometer los recursos del Banco Central de la República Argentina ni del Tesoro nacional. Facúltase al Banco Central de la República Argentina a organizar y poner en funcionamiento el sistema creado por el presente artículo.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 1º cuyo texto ha sido leído por Secretaría.

— Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 2º.

Por Secretaría se dará lectura del texto propuesto por la comisión.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Dice así:

Introdúcense las siguientes modificaciones en la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por ley 24.144:

1. Agrégase como último párrafo del inciso c) del artículo 17, el siguiente texto:

Cuando sea necesario dotar de adecuada liquidez al sistema financiero, o cuando circunstancias generales y extraordinarias lo hicieran aconsejable a juicio de la mayoría absoluta del directorio, podrán excederse los plazos y máximos por entidad previstos por el inciso b) precedente y en el primer párrafo de este inciso, sin que en ningún caso puedan comprometerse para ello las reservas de libre disponibilidad que respaldan la base monetaria. Cuando se otorgue este financiamiento extraordinario, además de las garantías que se constituirán con activos de la entidad, los socios pondrán como mínimo el capital social de control de la entidad y prestarán conformidad con la eventual aplicación ulterior del procedimiento previsto en el artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras. Podrá exceptuarse de este requisito a los bancos oficiales.

2. Modifícase el inciso d) del artículo 17, que quedará redactado de la siguiente forma:

d) Las derivadas de convenios internacionales en materia de pagos, y la toma de préstamos de organismos multilaterales u oficiales extranjeros, bancos centrales o cuales de los cuales sólo el banco pueda ser prestatario, por sí o por cuenta del Tesoro nacional como agente financiero de la República, sin que en ningún caso pueda comprometer las reservas de libre disponibilidad que respaldan la base monetaria.

3. Agrégase como inciso e) del artículo 17, el siguiente texto:

e) Ceder, transferir o vender los créditos que hubiere adquirido de las entidades financieras afectadas de problemas de liquidez.

4. Incorpórase como inciso b) del artículo 18 el siguiente texto:

b) Encomendar a los Fideicomisos que constituya el Poder Ejecutivo Nacional o las entidades financieras que autorice para ello, la gestión y transferencia de activos y pasivos financieros.

5. Incorpórase como inciso g) del artículo 18 el siguiente texto:

g) Establecer políticas financieras orientadas a las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales, por medio de exigencias de reserva o encajes diferenciales.

6. Modifícase el segundo párrafo del artículo 21, que quedará redactado como sigue:

El Banco no pagará interés alguno sobre las cantidades depositadas en la cuenta del gobierno nacional, salvo por los depósitos que efectúe por cuenta y orden de éste en entidades financieras nacionales o internacionales. El percibirá remuneración por los pagos que efectúe por su cuenta, pero podrá cargarles los gastos que a su vez haya pagado a las entidades financieras.

7. Modifícase el artículo 49, que quedará redactado como sigue:

El superintendente podrá, previa autorización del presidente del Banco, disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de las operaciones de una o varias entidades financieras, por un plazo máximo de treinta (30) días. De esta medida se deberá dar posterior cuenta al directorio.

Si al vencimiento del plazo de suspensión el superintendente propiciara su renovación, sólo podrá ser autorizada por el directorio, no pudiendo exceder de los noventa (90) días. En tal caso el superintendente podrá prorrogar preferencialmente el plazo máximo establecido en el artículo 34, segundo párrafo, de la ley 21.526.

Mientras transcurre el plazo de suspensión no se podrán tomar medidas cautelares ni realizar actos de ejecución forzada contra la entidad. Asimismo, durante dicho período serán nulos los compromisos que aumenten los pasivos de las entidades y se suspenderá su exigibilidad, así como el devengamiento de los intereses, con excepción de los que correspondan por deudas con el Banco. La suspensión transitoria de operaciones, en ningún caso, dará derecho a los acreedores al reclamo por daños y perjuicios contra el Banco o el Estado nacional.

El superintendente podrá solicitar al directorio se revoque la autorización para operar de una entidad financiera. En tal caso el directorio deberá evaluar tal solicitud en un plazo máximo de quince (15) días corridos a partir del momento de la solicitud. Este plazo será prorrogable por única vez, por otros quince (15) días corridos.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: en cuanto al artículo 19, nosotros entendemos que es indispensable estipular el plazo en el que el Banco Central pondrá en funcionamiento este sistema de seguro de depósitos.

Existen otras características de este sistema de depósitos que tendrían que estar definidas en dicho artículo como, por ejemplo, cuáles son los depósitos asegurables de los directivos de las entidades financieras, cómo se cargan los costos, etcétera.

Compartimos la idea central en cuanto a la creación de este seguro y en este sentido vamos a votarlo afirmativamente. No obstante, dejamos a salvo nuestra discrepancia respecto de estos aspectos que lo convierten en incompleto y que pueden llegar a frustrar una idea que entendemos valiosa.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: atento a la alusión del señor diputado Olivera, quisiera que la Presidencia me aclare cuál es la metodología de votación.

Sr. Presidente (Pierri). — Se vota artículo por artículo, con las modificaciones propuestas.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Ibarbia. — Señor presidente: creo que la aclaración que se acaba de formular no resuelve el problema.

Cuando empezamos a discutir el tema se puso en consideración el Orden del Día N° 1.251, y nunca se aclaró que debía reinterpretarse según un despacho que tiene seis artículos con un texto completamente diferente. De manera que es conveniente aclarar que el señor diputado Miguel Angel Balestrini, como miembro informante de la comisión, no indicó que el dictamen contenido en el Orden del Día N° 1.251 fue reemplazado por otro texto.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia aclara que se votó el artículo 1° con las modificaciones propuestas por la comisión, y que se había puesto en consideración el artículo 2°.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Dumón. — Señor presidente: vamos a proponer un agregado al artículo 2º que diría así: "Asimismo se exigirá la garantía personal y solidaria de los directores, miembros del Consejo de Vigilancia y del Consejo de Administración en su caso." Formulamos esta propuesta a los efectos de evitar posibles maniobras teniendo en cuenta que se trata de una medida que representa un gran esfuerzo para el Estado y por los momentos que estamos viviendo.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Fragoso. — Señor presidente: como no tenemos a nuestro alcance el texto que finalmente fue acordado en la comisión, voy a formular una propuesta respecto del inciso 4, apartado b), en función de la conversación que hoy mantuvimos con el señor presidente del Banco Central y los funcionarios que lo acompañaron.

Queremos relacionar el funcionamiento del fideicomiso para capitalización de bancos con las atribuciones del Banco Central de la República Argentina, que en general aparecían desvinculadas, con una sola excepción.

En consecuencia, proponemos el siguiente texto: "Encomendar por tiempo determinado a los fideicomisos que constituya el Poder Ejecutivo nacional o a las entidades financieras que autorice para ello, la gestión de los objetivos previstos en los mismos y se relacionen con las entidades reguladas por esta ley o por la Ley de Entidades Financieras. No se podrán encomendar gestiones que resulten propias e indelegables del Banco Central de la República Argentina." Esto significa en buen romance que los fondos de fideicomiso para capitalización podrán realizar aquellas gestiones que sean encomendadas por el Banco Central de la República Argentina y no otras cualesquiera.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera. — Señor presidente: complementando lo que acaba de decir el señor diputado preopinante debo manifestar que si no se aceptara la propuesta que realizó, por lo menos quede en claro en el inciso b) del punto 3 del artículo 2º que no podrán encomendarse a los fideicomisos funciones propias e indelegables del Banco Central de la República Argentina.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: en la seguridad de que los objetivos que han planteado los señores diputados preopinantes se encuentran contemplados en la redacción que ha

sido puesta en consideración, la comisión no acepta las modificaciones propuestas.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 2º propuesto por la comisión.

— Resulta afirmativa con el voto de más de las dos tercenas partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 3º.

Por Secretaría se dará lectura del texto propuesto por la comisión.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Dice así:

Introdúcense las siguientes modificaciones en la Ley de Entidades Financieras:

1. Modifícase el segundo párrafo del artículo 15, que quedará redactado del siguiente modo:

El Banco Central considerará la oportunidad y conveniencia de esas modificaciones encaminándose facultado para denegar su aprobación, así como para revocar las autorizaciones concedidas cuando se hubieren producido cambios fundamentales en las condiciones básicas que se hayan tenido en cuenta para acordarlas.

2. Incorpórase como capítulo IV del título III de la Ley de Entidades Financieras, el siguiente:

CAPÍTULO IV

Reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los depósitos bancarios

Artículo 35 bis: Cuando a juicio exclusivo del Banco Central de la República Argentina, adoptado por la mayoría absoluta de su directorio, una entidad financiera se encontrara en cualquiera de las situaciones previstas por el artículo 14, aquél podrá autorizar su reestructuración en defensa de los depositantes, con carácter previo a considerar la revocación de la autorización para funcionar. A tal fin, podrá adoptar cualquiera de las siguientes determinaciones, o una combinación de ellas:

I. Reducción, aumento y enajenación del capital social

a) Disponer que la entidad registre contablemente pérdidas contra el provisionamiento parcial o total de activos cuyo estado de solvabilidad, realización o liquidez así lo requiera, a solo juicio del Banco Central, y la reducción de su capital y/o afectación de reservas contra ellas;

b) Otorgar un plazo para que la entidad resuelva un aumento de capital social y reservas para cumplir con los requisitos establecidos por las normas aplicables, el que deberá ser suscrito e integrado dentro de dicho plazo.

Los accionistas que suscriban dicho aumento de capital o integren nuevo capital deberán ser autorizados de conformidad con lo previsto en el artículo 15.

El Banco Central fijará el plazo en caso del inciso a) y de este inciso teniendo en cuenta los plazos mínimos legales para el otorgamiento de los actos societarios del representante legal, del órgano de administración, y del órgano asambleario necesarios para su implementación;

- e) Revocar la aprobación para que todos o algunos accionistas de una entidad financiera continúen como tales, otorgando un plazo para la transferencia de dichas acciones, que no podrá ser inferior a diez (10) días;
- d) Realizar o encomendar la venta de capital de una entidad financiera y del derecho de suscripción de aumento de capital. A este efecto, la entidad y los socios prepararán su conformidad y depositarán los títulos representativos de sus participaciones, si ello no hubiera ocurrido hasta ese momento.

II. Exclusión de activos y pasivos o transferencia a otras entidades financieras

- a) Disponer la exclusión de activos a su elección, valuados de conformidad a las normas contables aplicables a los balances de las entidades financieras, por un importe equivalente al de los distintos rubros del pasivo mencionados en el inciso b);
- b) Excluir del pasivo los depósitos definidos en los incisos d) y e) del artículo 49, así como, en su caso, los créditos del Banco Central de la República Argentina debidos en el artículo 53, respetando el orden de prelación entre estos acreedores;
- c) Autorizar y encomendar la transferencia de los activos y pasivos excluidos conforme a los incisos a) y b), manteniendo en cada caso la equivalencia entre los mismos;
- d) Otorgar las facilidades previstas en el último párrafo del artículo 21, y aprobar propuestas de entidades a reestablecer la liquidación mediante la sincronización de los compromisos de activos y pasivos.

III. Intervención judicial

Solicitar al juez de comercio la designación de un interventor judicial —con o sin desplazamiento de las autoridades estatutarias de administración— cuando resultara necesario a fin de implementar las alternativas previstas en este artículo, y al solo juicio del Banco Central de la República Argentina se den los supuestos previstos por el artículo 44. El juez deberá designar como interventor a la persona que proponga el Banco Central de la República Argentina, y dispondrá la intervención con las facultades

que aquél le solicite, que no podrán exceder las que corresponden a los órganos de administración o gobierno, según corresponda.

IV. Responsabilidad

En los casos previstos en este artículo se aplicará lo dispuesto por el artículo 49, segundo párrafo *in fine* de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina, respecto de éste, los fideicomisos referidos en el artículo 18, inciso b) de la carta orgánica, y los terceros que hubieran realizado los actos en cuestión, salvo la existencia de dolo. La falta de legitimación alcanza a los acreedores, socios, administradores y la propia entidad.

3. Modifícase el inciso 3, artículo 41, que quedará redactado de la siguiente forma:

5. Inhabilitación temporaria o permanente para desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de las entidades comprendidas en la presente ley.

4. Agrégase como segundo párrafo del artículo 45, el siguiente:

Quando la liquidación hubiera sido solicitada directamente por la entidad, previo a todo trámite el juez notificará al Banco Central para que tome la intervención que le corresponde conforme a esta ley.

5. Modifícase el tercer párrafo del artículo 45, que quedará redactado de la siguiente forma:

Si las autoridades legales o estatutarias de la entidad lo solicitaren al juez y éste considere que existen garantías suficientes, previa conformidad del Banco Central, podrá autorizarlas a que ellas mismas administren el proceso de su cese de la actividad reglada por la presente ley o de la liquidación de la entidad. En cualquier estado del proceso de autoliquidación de la actividad o de la persona jurídica, el juez podrá disponer la continuación de los mismos por la vía judicial si se dieren los presupuestos de la legislación societaria o concursal para adoptar tal determinación.

6. Modifícase el primer párrafo del artículo 48, que quedará redactado del siguiente modo:

El liquidador judicial deberá ser designado por el juez competente, conforme a lo dispuesto por la Ley de Concursos y Quiebras para los síndicos. En el supuesto de que se declare la quiebra de la entidad, el liquidador designado continuará desempeñándose como síndico.

7. Sustitúyese el inciso b) del artículo 49 por el siguiente:

b) La resolución que disponga la liquidación judicial tendrá la misma publicidad que la establecida por la Ley de Concursos, para la declaración de quiebra, aplicándose de igual modo, en forma análoga, la publicidad y procedimiento para la inscripción y verificación de los créditos que componen el pasivo. Los pagos a los acreedores deberán efectuarse con la previa conformidad del juez interventor, en concordancia con el inciso g), y aplicándose igualmente en forma análoga lo dispuesto por la Ley de Concursos y Quiebras para la liquidación de los bienes y proyecto de distribución y pago a los acreedores.

8. Modifíquense los incisos d) y e) del artículo 49, los que quedarán redactados del siguiente modo:

- Sobre la totalidad de los fondos o conjunto, sin distinción por clase de depósitos, que la entidad liquidada hubiere depositado en concepto de encaje por efectivo mínimo, los depositantes tendrán un privilegio especial, exclusivo y excluyente, para la satisfacción de su crédito conforme a la siguiente ordenación:
- Hasta la suma de cinco mil pesos (\$ 5.000) por persona o su equivalente en moneda extranjera, gozando de este privilegio especial una sola persona por depósito.
- Sobre el remanente de los encajes, la totalidad de los depósitos con títulos a plazos mayores de noventa días.
- Sobre el saldo de los encajes, el remanente de los depósitos a prorrata.

Al resolver la revocación de la autorización para funcionar de conformidad con el artículo 44, o durante el período de suspensión transitoria, el Banco Central de la República Argentina podrá ordenar que se efectivice el pago a los depositantes que gozan del privilegio previsto en este inciso.

e) Los depositantes tendrán privilegio general y absoluto para el cobro de sus acreencias por sobre todos los demás créditos, con excepción de los créditos con privilegio especial de prenda e hipoteca.

Al resolver sobre la revocación de la autorización para funcionar, de conformidad con el artículo 44, el Banco Central de la República Argentina podrá autorizar que se efectivice el pago a los depositantes del privilegio dispuesto por este inciso a prorrata de los fondos líquidos de que disponga la entidad, cumplimentado lo dispuesto en el inciso anterior.

9. Sustitúyase el cuarto párrafo del artículo 50 por el siguiente:

Estando la entidad en proceso de liquidación judicial, el liquidador deberá solicitar de inmediato la declaración de quiebra si advirtiera la cesación de pagos por sí mismo, o en virtud de los pedidos de quiebra formulados por terceros. De igual modo deberá proceder el juez si advirtiera la existencia de los presupuestos fatales. El pedido y la declaración tramitarán previa citación al deudor por el plazo de cinco días.

10. Modifíquese el artículo 51, que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 51: Una vez que el juez interventor declare la quiebra, ésta quedará sometida a las disposiciones de esta ley y de la Ley de Concursos y Quiebras, salvo en lo concerniente a las siguientes disposiciones:

- a) No serán reputados ineficaces ni susceptibles de revocación, de conformidad con las normas de la Ley de Concursos y Quiebras, los actos realizados o autorizados por el Banco Central por los supuestos previstos en la ley vigente hasta la sanción de la ley 24.141, ni los actos realizados o autorizados a realizar a entidades o terceros de acuerdo a las disposiciones del artículo 33 bis de la presente ley y el artículo 17 incisos b), c) y e) de la Carta Orgánica del Banco Central, ni los créditos del Banco Central con el privilegio absoluto del artículo 53 ni sus garantías;
- b) En ningún caso serán aplicables las normas sobre continuación de la explotación de la empresa;
- c) Lo dispuesto por los incisos d) y e) del artículo 49 será igualmente aplicable en caso de quiebra.

11. Modifíquese el artículo 53, que quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 53: Los fondos asignados y créditos otorgados por causa de redescuentos, adelantos, pagos efectuados en virtud de convenios de créditos recíprocos o por cualquier otro concepto, le serán satisfechos al Banco Central con privilegio absoluto por sobre todos los demás créditos, con las siguientes excepciones:

- a) Los créditos de los depositantes, de acuerdo a lo previsto en el artículo 49 incisos d) y e);
- b) Los créditos con privilegio especial por causa de hipoteca, prenda, o las garantías otorgadas conforme a lo previsto por el artículo 17, incisos b) y c) de la Carta Orgánica del Banco Central, en la extensión de sus respectivos ordenamientos;
- c) Los créditos privilegiados emergentes de las relaciones laborales, comprendidos en el artículo

lo 268 de la ley 21.297 (texto ordenado en 1976). Tendrán el mismo privilegio los intereses que se devenguen por las acreencias precedentemente expuestas hasta la cancelación total.

12. Agréguese los siguientes párrafos al artículo 62.

En los casos previstos en el artículo 44, inciso e), las cajas de crédito y bancos comerciales que revistan la forma jurídica de cooperativa o de asociación civil podrán transformarse en sociedades anónimas o constituir una sociedad anónima para transferirles el fondo de comercio a los efectos del ejercicio de la actividad financiera, con la aprobación del Banco Central de la República Argentina.

Cualquiera sea el tipo societario, en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 35 bis los socios o accionistas podrán ejercer el derecho de receso, resultando inaplicables las disposiciones de los artículos 78, 245 y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 3º cuyo texto ha sido leído por Secretaría.

— Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 4º.

Por Secretaría se dará lectura del texto propuesto por la comisión.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Dice así:

Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las inversiones financieras previstas en el decreto 445, del 28 de marzo de 1995, con la finalidad allí contemplada.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 4º cuyo texto ha sido leído por Secretaría.

— Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — En consideración el artículo 5º.

Por Secretaría se dará lectura del texto propuesto por la comisión.

Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Dice así:

Encomiéndase al Poder Ejecutivo confeccionar un texto ordenado de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y de la Ley de Entidades Financieras, que contemple lo previsto por el artículo 7º de la ley 21.144.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 5º cuyo texto ha sido leído por Secretaría.

— Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: propongo que se incorpore el siguiente texto como artículo 6º: "Deróganse los artículos 26, 27, 28 y 29 del decreto 230/95 dictado el 27 de febrero de 1995."

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Señor presidente: quisiera plantear un resguardo legal respecto del decreto 230/95, calificado como de necesidad y urgencia, por cuanto ha sido dictado en contravención al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.

Para no cansar a la Honorable Cámara, simplemente diré que de la misma manera que en su momento fundamos este criterio con motivo de tratarse el proyecto de ley de solidaridad previsional, hoy podríamos insistir en que el texto en consideración debería decir que se declara nulo —y no que se deja sin efecto— ese decreto de necesidad y urgencia porque no contempla las previsiones del inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional. Sé que la mayoría no comparte este criterio pero es necesario que nosotros, que tenemos esta convicción sobre el particular, dejemos explícita nuestra negativa a que el texto haga referencia a "dejar sin efecto", ya que debería declararse su nulidad, de acuerdo con lo que establece la Constitución Nacional.

Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta la modificación propuesta?

Sr. Balestrini (M. A.). — No, señor presidente. La comisión ratifica la redacción original que propuso.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 6º según el texto leído por el señor miembro informante de la comisión.

— Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: mediante el artículo 7º cuya inclusión solicito se

incorpora el control parlamentario que surge de la creación en el ámbito del Congreso de la Nación de una comisión bicameral. El texto de este artículo se ha consensuado y obra en poder de la Presidencia. Si fuera necesario, le daré lectura, pero su contenido ya ha sido informado en el debate en general.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Olivera.— Señor presidente: solicito que se efectúen algunos agregados a este nuevo artículo 7º. En ese sentido, a continuación de donde dice "y del artículo 8º de la ley 24.145" debe establecerse el plazo en el cual esta comisión tiene que estar constituida.

La redacción que proponemos es la siguiente: "Deberá estar constituida en un plazo de 30 días corridos desde la fecha de sanción de la presente ley."

Asimismo solicitamos la incorporación del siguiente párrafo al final del inciso 1º del artículo 7º: "La integración de la comisión deberá reflejar la actual composición pluralista de ambas Cámaras."

Por último, sugerimos que en el inciso 4º se agreguen los términos "inmediata y obligatoriamente" luego de la palabra "prestar" y antes de la expresión "... toda su colaboración informativa...".

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Molinas.— Señor presidente: resulta poco serio que estemos por votar un artículo del que ni siquiera tenemos copia.

Si lo que se quiere realmente es un control en esta comisión bicameral, debe establecerse expresamente que la oposición tendrá mayoría porque de lo contrario es una comisión inútil donde la mayoría siempre va a aceptar lo que disponga el Banco Central o el Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Leconte.— Señor presidente: adelanto que votaremos en contra de este artículo porque no tenemos la menor información de su contenido ni estamos al tanto de su inclusión en el proyecto.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin.— Señor presidente: es conveniente que se dé lectura de este artículo, al que asignamos mucha importancia. Creemos que se trata de una disposición sobre la que los señores diputados, independientemente del sentido de su voto, deben estar suficientemente infor-

mados, pues se trata de una decisión para participar en el control de una cuestión que es sumamente delicada e importante en este momento del país.

Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor miembro informante.

Sr. Balestrini (M. A.).— Señor presidente: con la aclaración de que la comisión va a aceptar las modificaciones propuestas por el señor diputado Olivera, paso a dar lectura del texto original del artículo 7º. Dice así: "Artículo 7º. Créase en el ámbito del Congreso Nacional una Comisión Bicameral de Seguimiento del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial decreto 286/95, y del Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria decreto 445/95 y del artículo 8º de la ley 24.145.

"1. Dicha comisión estará integrada por cinco (5) senadores y cinco (5) diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, los que establecerán su estructura interna.

"2. Dicha comisión tendrá como misión el seguimiento de las medidas a implementar conforme a los decretos 286/95, 445/95 y de la ley 24.145, por lo cual el Poder Ejecutivo nacional deberá informar sobre las resoluciones a adoptarse en virtud de los referidos instrumentos legales.

"3. Para cumplir su cometido la comisión podrá requerir información a todas las entidades previstas en las disposiciones de los referidos decretos.

"4. La comisión bicameral podrá requerir información al Poder Ejecutivo, formular observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes y emitir dictámenes en los asuntos a su cargo. Los órganos de contralor del Estado deberán prestar toda su colaboración informativa e infraestructura organizacional que la comisión requiera para el cumplimiento de su cometido. En igual sentido deberán prestar su apoyo el Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina y el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación.

"5. Todos los informes que la comisión requiera u obtenga están sujetos al secreto bancario previsto en los artículos 39 y 40 de la Ley de Entidades Financieras.

"6. A los efectos del cumplimiento de sus fines, la comisión bicameral queda facultada a dictar su propio reglamento de funcionamiento.

Solicitamos que esta reducción, con las modificaciones propuestas por el señor diputado Olivera, sea puesta a votación.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Natale. — Señor presidente: habida cuenta de la composición de la Cámara, si la comisión se constituye con cinco miembros del Senado y cinco de este cuerpo, es muy probable que se termine designando a tres representantes del bloque justicialista y a dos del bloque radical. Esto dejaría fuera de representación a un conjunto de bloques que, además han hecho esfuerzos importantes para contribuir, con su tarea legislativa, a la solución de la crisis. Por lo tanto, solicito que por lo menos sea incrementado a seis el número de miembros de cada una de las respectivas representaciones de la Cámara de Diputados y del Senado.

Sr. Olivera. — Si me permite, señor presidente, deseo señalar que nuestro bloque no tiene inconvenientes respecto de la propuesta formulada por el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Balestrini (M. A.). — Señor presidente: originalmente se estableció que esa comisión estaría integrada por tres diputados y tres senadores. Se trabajó mucho sobre este tema y finalmente se coincidió en la necesidad de que la comisión estuviese compuesta por cinco diputados y cinco senadores. Lamentablemente, no estamos en condiciones de aceptar la propuesta formulada por el señor diputado Natale.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el artículo 7º con las modificaciones aceptadas por la comisión.

— Resulta afirmativa con el voto de más de las dos terceras partes de los diputados presentes.

— El artículo 8º es de forma.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el proyecto de ley. ¹ (Aplausos.)

Se comunicará al Honorable Senado.

6

MOCION DE ORDEN

Sra. Bullrich. — Pido la palabra para una moción de orden.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una moción de orden tiene la palabra la señora diputada por la Capital.

¹ Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 901.)

Sra. Bullrich. — Señor presidente: solicito que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento para dar entrada y considerar sobre tablas el proyecto de declaración contenido en el expediente 981-D-95.

En el día de hoy, las empresas prestadoras de servicios públicos han anunciado su decisión de aumentar las tarifas. Como los señores diputados saben, esas empresas se hallan bajo un régimen especial por el cual la tasa del impuesto al valor agregado que aplican es la que rige al momento del vencimiento de sus facturas, lo que les permite cobrar el gravamen con retroactividad. Los pliegos también permiten el traslado automático a la facturación.

Nuestro pedido tiende a que las empresas prestadoras contribuyan al esfuerzo general que está realizando la sociedad argentina. Sabemos que la rentabilidad de estas empresas, que también está garantizada en los pliegos, hace posible nuestra solicitud. En los últimos días, muchos empresarios en la Argentina han anunciado su decisión de absorber con sus ganancias este mayor impuesto, pues saben que se enfrentan con consumidores que cuidan sus ingresos y en consecuencia deciden sus compras en aquellos lugares que ofrecen ventajas. Pero en el caso de estas otras empresas los consumidores están obligados a utilizar sus servicios ya que no pueden prescindir de ellos. Esta ventaja comparativa no debería ser aprovechada en un momento como el que atraviesa el país. Por ello consideramos que el esfuerzo solidario que todos estamos haciendo también deben efectuarlo aquellas empresas que prestan servicios esenciales e imprescindibles.

Por las razones expuestas, solicito que la Honorable Cámara apruebe el proyecto de declaración en el que se solicita que las empresas prestadoras de servicios públicos absorban el incremento de la alícuota del IVA.

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción de apartamiento del reglamento formulada por la señora diputada por la Capital. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobada la moción.

7

MOCION DE SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra la señora diputada por la Capital.